

TORRES & TORRES - ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Señor:

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (REPARTO).

ACCIÓN:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral (Art. 138 de la Ley 1437 de 2.011).
Demandante:	FABIO ARTURO ZUÑIGA CAMPO
Representado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FNPSM), DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION.

SEÑOR ENRIQUE TORRES TRUJILLO, mayor de edad, abogado de oficio y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación del señor FABIO ARTURO ZUÑIGA CAMPO, conforme el poder que me ha sido conferido; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del C.P.A.C.A, respetuosamente me permito instaurar demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral en contra de MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FNPSM), DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION; entidades representadas tal como se indica en el capítulo de identificación de las partes; true que mediante el informe de la procedencia ordinaria de primera instancia se profería sentencia contra los puntos que aquí esbozadas.

a) DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

a) DEMANDANTE:

- Nombre: FABIO ARTURO ZUÑIGA CAMPO.
- NIT de identidad: 10.528.121 de Popayán.
- Domicilio: Calle 16A No. 11-07 de Trujillo.
- Teléfono: 3126332312.

b) ENTIDAD DEMANDADA:

- Nombre: FONDO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y AVENIDAS NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FNPSM).
- Domicilio: Calle 43 N° 57-14 CAM en Bogotá.
- Teléfono: 2222600.
- Correo Electrónico: notificacionsejuidiciales@mineducacion.gov.co
- Lugar: DISTRIBUIDOR DE LA RAZÓN Y ALIANZA JUDICIAL EDUCACIÓN
- Domicilio: Carrera 7 Calle 4 Esquina
- Teléfonos: 2 - 8320362
- Correo Electrónico: p2j.alianzajudicial@gmail.com

TORRES & TORRES - ABOGADOS
ASOCIADOS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

c) ACIONERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDANTE:

- Nombre: OSCAR GERARDO TORRES TRUJILLO
- I.D de Cédula: 79.629.261 de Bogotá.
- N.º de Varilla Profesional: 210.035 del C.S. de la J.
- Domicilio: Avenida 2 Norte N° 7 N - 53 Oficina 413 Edificio Centenario II de la ciudad de Cali - Valle del Cauca.
- Teléfonos: 361 3530 – 631 35 32.
- Correo Electrónico: acogetorres@outlook.es@gmail.com

d) REPRESENTANTE LEGAL Y LA ENTIDAD DEMANDADA:

- Representante Legal: Dra. YANETH GIHA, Ministra de Educación, o quien haga sus veces.
- Domicilio: Calle 43 N° 57-14 C-H en Bogotá.
- Teléfono: 2222800.
- Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
- Representante Legal: Señor OSCAR RODRIGO CAMPO, Gobernador del Departamento del Cauca, y YOLANDA MENÉSSES, Secretaria de Educación de la Gobernación del Cauca, y/o quienes estén desempeñando sus funciones.
- Domicilio: Carrera 6 No. 3-82
- Teléfonos: 2-8244201

II. PRIMENCIAS, DECLARACIONES Y CONDENAS

15. Que se declarare configurado el **SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO** respecto de la petición presentada el día 17 de Julio de 2018, mediante la cual el demandante solicitó al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION, que su mesada pensional sea pagada y reajustada anualmente con base a los ordenamientos consignados en el numeral 5º del Artículo 8º de la Ley 91 de 1.989 y en el Artículo 1º de la Ley 71 de 1988, respectivamente; solicitando consecuentemente la devolución de los dineros superiores al 5%, que bajo el rótulo de E.P.S., le han descontado de las mesadas pensionales incluidas las mesadas adicionales de Junio y Diciembre; y que el ajuste anual de la Pensión sea en la misma proporción en que se incrementa el salario mínimo legal mensual y no con base al porcentaje del I.P.C., reportado por el DANE.

16. Que se declare falso el **ACTO ADMINISTRATIVO FICTO O PRESUNTO**, que ha surgido como consecuencia del silencio administrativo negativo, respecto de las peticiones formuladas por la Demandante mediante memorial radicado ante la Accionada el día 17 de Julio de 2018.

17. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de reparación del daño, se prolija sentencia en donde se ratifique que la demandante pertenece al régimen exceptuado consagrado en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1.983, que se encuentra cobijada por régimen específico contenido en la Ley 81 de 1.988, de conformidad con lo determinado por la Ley 812 de 2.003, para los docentes que se vincularon a la educación oficial con anterioridad al 27 de Junio de 2.003, y cuya cu Pensión Ordinaria de Jubilación debe ser pagada y reajustada

ACUERDO DE CONVENCIÓN AÑO 2013
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

en cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º numeral 1º de la Ley 1.983.

Subsecuentemente con las anteriores declaraciones respetuosamente solicito a su Honorable despacho Judicial, condenar a la NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOCIALES - MINISTERIO, DEPARTAMENTO DEL PENSIONADO ESTATAL DE COLOMBIA para que por intermedio de la FIDUPREVISORA S.A., proceda:

- I. A efectuar los descuentos para efectos de coprobar el efecto de los porcentajes aplicados a la cuantía pensional de mi representado, en la cuantía establecida en el numeral 5º del Artículo 8º de la Ley 91 de 1.993, es decir, el 5% de cada mesada incluyendo las adicionales, ordenándosele cesar el descuento en cuantía del 12%, como actualmente lo está realizando.
 - II. A readjustar anualmente la mesada en el monto de docecientos pesos cincuenta mil veinticinco en el Artículo 1º de la Ley 71 de 1993, esto es en efectivo, incremento en que cada año es incrementado el Salario mínimo legal mensual y disponer su aplicación en forma retroactiva al año en que el docente consolidó el derecho pensional y de manera constante para las mesadas subsiguientes y futuras.
 - III. A reintegrar al Demandante los valores de dinero superiores al 12% de los totales de aportes al sistema de Caja le han sido descontadas de las mesadas pensionales y adicionales de Junio y Diciembre, respecto de la Pensión de Jubilación que la Demandada reconoció a mi representado y a no continuar descontando valores superiores al precitado porcentaje en el pago de las mesadas futuras.
 - IV. A que pague en favor del Demandante los valores resultantes por los diferencias existentes entre la mesada pensional que actualmente recibe el demandante, y la que resulte después de tomar el valor pensional que le fue reconocido al momento del estatus, y readjustarlo año tras año con base a los porcentajes en que se ha incrementado el salario mínimo legal mensual.
 - V. A que pague de manera indexada las sumas de dinero que se obtengan como resultado de las declaraciones y condenas aquí solicitadas, ordenando que sobre dicho retroactivo se reconozcan los ajustes de valor y los respectivos intereses corrientes y moratorios, tal como se dispone en los artículos 187, 188, 182 y 183 de la Ley 1437 de 2.011.
- 4º. **AJUSTE DE VALOR:** La suma que resulta establecida por lo anterior, sea ajustada conforme a la fórmula sentada para esos eventos por el Consejo de Estado, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2.011, según la cual el valor inicial (R) se determina multiplicando el valor inicial (R_0), que es la diferencia de la R_0 dividida por la parte de demandante, por el guarda que resulta de dividir el Índice Inicial o Índice al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia), entre el Índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago de cada mensualidad o prestación):

$$R = R_0 \cdot \frac{I_{final}}{I_{initial}}$$

Es claro que por tratarse de pagos de trámite sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes con mes comenzando por la diferencia en la primera mensualidad, teniendo en cuenta que el Índice inicial es el vigente al momento de la ejecución al trámite.

ACUERDO DE PAGOS A ABOGADOS
EN CASO DE CONDENA AL MUNICIPIO LABORAL EN JUICIO INSTRUMENTAL

5º. Se condene al pago de intereses en cuento se den los supuestos de hecha en el art. 181 de la Ley 1437 de 2.011.

6º. Se condene, al pago de los costos del juicio, expensas y agencias en derecho, en la cantidad que determine esa honorable corporación, siguiendo los lineamientos del art. 138 de la Ley 1437 de 2.011, en concordancia con el Código General del Proceso, teniendo como base las excepciones que no se prueben dentro del proceso, el desgaste del juicio judicial colombiano en que se ha incurrido por el simple hecho de que la demandada no ha sido correcta aplicación de la Ley. Igualmente se deben cuantificar los graves perjuicios que se le causaron a mi mandante quien ha tenido que acudir ante un profesional del derecho para que sea restablecido en sus derechos laborales y prenacionales, situación que le ha hecho incurrir en gastos y en el pago de Honorarios profesionales tantoce en cuota IVA sobre el retroactivo adeudado, y el pago del impuesto concerniente al IVA equivalente al 16% sobre los honorarios pactados, deducciones que afectaran sus intereses económicos y que se han generado como consecuencia de las actuaciones ilegales efectuadas por la entidad aquí demandada. Anexo copia del contrato de servicios profesionales de Abogado.

7º. Se condene a que la Entidad demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos de los Art. 187, 189, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2.011 y el Art. 18 de la Ley 446 de R.R.A.

8º. RECLAMACIONES:

En el evento que el honorable despacho judicial llegare a determinar que el régimen aplicable a mi poderdante es el Regimen General de Pensiones contemplado en la Ley 100 de 1.993 y 797 de 2.003; amablemente solicito se tenga en cuenta que esta norma sólo contempla única y exclusivamente un descuento para efecto de aportes al sistema de salud por un monto equivalente al 12% de la mesada pensional sin aplicársele dicha otra vez a las mesadas adicionales de junio y diciembre; consecuentemente me permito solicitar que la entidad demandada sea condenada y se le ordene:

- a) Que se le reintegren a mi poderdante los dineros que bajo el rotulo de E.P.S. le ha sustraído en las mesadas adicionales de Junio y Diciembre, los cuales ascienden al 12% ramo de valor de la mesada pensional devengada; ordenando que el retroactivo que se obtenga, se pague de manera indexado, junto con los ajustes de valor y los intereses moratorios de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 187, 189,192 y 195 de la Ley 1437 de 2.011
- b) Que se le ordene a la FUNDACION LA PREVISCRA a no continuar realizando descuentos en las mesadas adicionales de junio y diciembre con destino al sistema de salud, indicándosele que dicho aporte debe ser solamente aplicado a la mesada pensional que devenga mi poderdante.
- c) Que se conozca al pago de los costos y agencias en derecho, intereses, moratoria y demás documentos que le puedan corresponder a mi representado, tal como fue solicitado en las pretensiones principales.

Atentamente,

J. G. SANCHEZ

TORRES & TORRES - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

PRIMERO: Mi representado se vinculó a Docencia Oficial con anterioridad al 27 de junio de 2.003, y cumplió con los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos para pensionarse, razón por la cual la accionada mediante Resolución N° 111 de 08 de Septiembre de 2009, le reconoció una Pensión Ordinaria de Jubilación con una mesada pensional en cuantía de \$1.420.771, valor correspondiente para el año 2009.

SEGUNDO: El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, por intermedio de la FIDUPREVISORA S.A., (Entidad encargada del pago de las pensiones del Magisterio), le está descontando a mi mandante el equivalente al 12% de cada mesada pensional, incluyendo las mesadas adicionales de Junio y Diciembre, con el objetivo de satisfacer los aportes al sistema de salud.

TERCERO: En el Acto Administrativo que concedió la pensión, se determinó que el beneficiario tiene derecho a que se le reajuste su pensión en armonía con lo dispuesto en la Ley 71 de 1.988, pero arbitrariamente la mesada Pensional que le fue reconocida a mi mandante, ha venido siendo incrementada anualmente con base a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir, en el mismo porcentaje corriente al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE anualmente.

CUARTO: El día 17 de Julio de 2018, mi mandante presentó ante el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio - LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DEL CAUCA, memorial peticionario solicitando la aplicación del numeral 5º del Artículo 6º de la Ley 31 de 1.999, respecto de los descuentos que se le aplican a sus mesadas pensionales a título de aportes al sistema de salud, indicando que el monto que se debe aportar es el 5% del valor de cada mesada y no el 12% que se le ha venido descontando, exigiendo la devolución de los valores excesivos que le fueron descontados.

Igualmente solicitó la aplicación del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, en lo referente a los ajustes anuales que se deben aplicar a la mesada Pensional, demandando que ésta no sea ajustada con base al I.P.C., de cada año, sino que sea actualizada con base a la misma proporción en que el Gobierno Nacional incrementa el salario mínimo legal Mensual cada año; solicitando se reconozca y pague de manera indexada la diferencia resultante, y que se reconozcan los respectivos intereses.

QUINTO: Hasta el momento de presentación de esta demanda, la Accionada no ha RESUELTO DE FONDO la petición anteriormente señalada, omitiendo la expedición del debido Acto Administrativo completo, tal como se lo ordena en el Decreto 2531 de 2.005 y el artículo 53 de la Ley 982 de 2.005. Por lo tanto y de conformidad con lo estipulado el artículo 83 de la Ley 1437 de 2.011 se ha configurado el Silencio Administrativo Negativo frente a esta petición, ya que han transcurrido más de tres meses contados a partir de la presentación sin que ésta haya sido resuelta, generándose de esta manera un Acto Administrativo Ficticio presunto Negativo.

Sin embargo La Fiduciaria de Inversión Cauca, que es la entidad que no está vinculada al proceso, expidió el Oficio No. 2018-070801491 de 03 de Octubre de 2018, en el cual se informa que dicha entidad se encuentra facultada por lo dispuesto en el Artículo 204 de la Ley 100 de 1.993, realizar los descuentos por aportes a salud del doce por ciento (12%) de cada una de las mesadas pensionales que heredó el decantado, incluyendo las mesadas adicionales por cuantía de Artículo 6º, de la Ley 31 de 1.989, así lo establece.

SEXTO: Contra dicho ACTO FICTICIO PRESUNTO NEGATIVO no se interpuso ningún Recurso, teniendo en cuenta que "el silencio negativo, en relación con la primera petición también ejerce la vía gremialista". Además, según lo mencionado, lo que regula la estructura Jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, solo

CONSEJOS DE ESTADOS - ABOGADOS

ASOCIACIONES EN DIFUSIÓN LABORAL - ADMINISTRATIVO

se permite la interposición del Recurso de Reposición contra sus Actos Administrativos, recurso que es Facultativo tal como lo contempla el Artículo 76 del C.P.A.C.A.

SEGUNDO: Que el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia proferida por la sala de Consulta y servicio Civil, Consejero Ponente (E): William Zambrano Cetina del 11 de marzo del 2013, Radicación 11001-33-03-00-2010-00009-00 (1.988) Actor: Ministerio de Educación Nacional; se pronunció respecto de la consulta efectuada por la Viceministra de Educación Nacional, sobre el porcentaje que deben aportar los docentes para el sistema de salud, en atención a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2.003 y al acto Legislativo 01 de 2.003; determinando dicha corporación de la forma siguiente, que los docentes que se vincularon con anterioridad al 27 de junio de 2.003, deben aportar de todas sus mecadas, incluidas las adicionales, el (cinco porcientos) 5%.

OCTAVO: Que casos análogos al presente ya han sido debatidos por la Jurisdicción, obteniéndose conclusiones que ratifican las tesis expuestas en esta demanda y por ende la viabilidad de conceder las pretensiones solicitadas en esta Acción contenciosa, tal como fue resuelto en las sentencias proferidas por:

• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"

Fechas: Bogotá D.C., siete (07) de junio de dos mil doce (2012).

Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO ARGINIEGAS TRIANA.

Expediente No: 11001-33-31-028-2010-00448-01

Actor: STELLA GONZALEZ

Demandado: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

• TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

Magistrado ponente: Dr. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID.

Fechas: Seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2.017).

Radicación: 78001-33-33-034-2014-00283-01.

Demandante: ANA CECILIA MICOLTA DE DELGADO.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO.

Medio de control: Nullidad y Restablecimiento del Derecho (L) Sentencia N° 147.

DECIMOO: LA CCRTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA Y EL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, han preferido sentencia de unificación de Jurisprudencia, indicando que el régimen aplicable a los Docentes que se Vincularon con anterioridad al 27 de junio de 2.003, es el contenido en la Ley 91 de 1.989, y que no se les puede aplicar ningún aspecto del Régimen General de Pensiones; tal como se estableció en las siguientes sentencias: (resaltos y negrillas fuera del texto original)

• CONSEJO DE ESTADO.

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSEJERO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01

Medio de control: Nullidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. En Liquidación¹

TORRES & TORRES - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Asunto: Sentencia de uniformidad jurisprudencial. Criterio de fijo pretención sobre el artículo 36 de la Ley 105 de 1993.
 Bogotá D.C., agosto veintiocho (28) de dos mil dieciccho (2018)

(-)95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera cubre a los servidores que, desde su afiliación al Fondo Nacional de Pensiones Sociales del Magisterio, no fueron exentados del Sistema Único de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989.³⁹ Por esta razón, estos servidores no están cubiertos por el régimen de transición.

CORTE CONSTITUCIONAL:

- Sentencia SU160/12

PENSION DE JUBILACION DENTRO DEL REGIMEN APPLICABLE AL MAGISTERIO-Requisitos

PENSION DE JUBILACION EN EL REGIMEN PENSIONAL DEL ALUMNADO-Normatividad aplicable.

(-)5. Se debe mencionar además la Ley 812 de 2003 que en su artículo 81 establece que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley. Establece además que los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Pensiones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen establecido en la medida establecida en la Ley 91 de 1989, Ley 101 de 2000 y Ley 115 de 2001, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

P.M. DERECHOS DE PENSIONES

La accionada no ha dado contestación a la petición radicada por mi mediante el día 17 de Julio de 2018, configurándose de esta forma el silencio administrativo negativo frente a una petición, tal como lo estipula el artículo 63 de la Ley 1437 de 2.011; de esta manera ha surgido un Acto Presunto Falso, el cual está negando a mi peticionario del correcto pago de su mesada pensional, aplicando el Régimen General de pensiones a un Docente que pertenece al Régimen exceptuado y por lo tanto tiene derecho a que se le apliquen los descuentos de salud según lo establecido en la Ley 91 de 1.989, y a que su mesada pensional sea ajustada anualmente de conformidad al Artículo 1º de la Ley 71 de 1.982.

La accionada ha dado una incorrecta interpretación a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 812 de 2.003, desconociendo los derechos prestacionales esenciales que quedaron reservados para los docentes que se vincularon hasta el 23 de Junio de 2.003, omitiendo la aplicación de preceptos normativos y jurisprudenciales aplicables a éstos, imponiendo normas del Régimen General de Pensiones a un Docente que

TORRES & TORRES - ABOGADOS

ESTUDIOS JURÍDICOS EN DERECHO LABORAL Y DERECHO CIVIL

pertenecen al Régimen exceptuado y danz que ser regido por Leyes especiales, manteniéndose su Actuación Administrativa al margen de la Ley y de los principios que regulan el desarrollo de la función administrativa; vulnerando derechos fundamentales y constitucionales, los cuales por ser particular laboral y prestacional son ciertos e inviolables; siendo ésta la causa que me vale interponer esta acción de Nulidad y Rechazoimiento de Decreto.

La presente demanda, se fundamenta Artículo 138, 160 numeral 2, 103 y 104 de la Ley 1437 de 2.011; además de la infracción a las normas que serán citadas.

V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y CADUCIDAD

Tal como lo establece el artículo 83 de la Ley 1437 de 2.011, se solicita declarar como falso el ACTO ADMINISTRATIVO NEGATIVO respecto de la Solicitud presentada el día 17 de Julio de 2016, la cual hasta el momento de la presentación de esta demanda no ha sido contestada mediante el debido Acto Administrativo.

De la misma forma, se solicita que se declare la NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO FICTICIO O PRESUNTO, denegatorio de la aplicación del numeral 5º de Artículo 8º de la Ley 91 de 1.989, referente a los aportes al sistema de salud y la aplicación del artículo 1º de la Ley 71 de 1988, en lo referente a los ajustes anuales con los que se debe actualizar la mesada Pensional; igualmente de la petición subsidiaria, y de la solicitud de reintegro de las deducciones excesivas ordenadas por FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FNPSM) y practicadas directamente por FIDUPREVISORA S.A., al momento de pagar y reajustar anualmente cada mesada pensional devengada por mi mandante.

Para decidir la procedencia de esta Acción es pertinente tener en cuenta lo siguiente:

1º) De acuerdo a lo consagrado en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2.011 el cual establece:

"Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa;

2º) Contra dicho ACTO FICTICIO O PRESUNTO NEGATIVO no se interpuso ningún Recurso, teniendo en cuenta que el silencio negativo, en relación con la primera petición también acota la vía gubernativa. Además, según la normatividad que regula la Estructura Jerárquica del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sólo existe el Recurso de Reposición, el cual es Facultativo, tal como lo contempla el Artículo 7º del C.P. S.C.A.

3º) El Honorable Consejo de Estado ha rectificado la eliminación del término de caducidad para los actos presuntos que resolvieran los recursos, puesto que para el máximo órgano rector de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, la expedición de la Ley 146 de 1989, que señaló en su artículo 44 tal disposición, modificó el numeral 3º del artículo 138 del C.P. S.C.A., por lo tanto es aplicable también al Silencio Administrativo Sustancial, es decir aquel que se produce por no contestar la primera Petición. En este sentido dicha corporación judicial señaló que:¹

¹CCS/EP/3 de ESTADO, S.C.A. SECCION: SEGUNDA - SUBSECCION "A", C.P. ANA MARGARITA OLAYA FORERO, Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Radicación No. 1999-99.

TORRES & TORRES - AVGAT 08

Especializado en Derecho Administrativo y Civil

"El asunto se contrae a establecer si en el sub-facto operó el laudo dentro de la caducidad para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se demanda la nulidad del acto sujeto por el fondo que el silencio administrativo provocó del M.R. ante el Dr. Fonseca, fundado en el interés particular elevado por el demandante en el año 11 de mayo de 1998, por la cual solicitó el reconciliación y pago de prestaciones sociales, indemnización, intereses y servicios médicos y quirúrgicos."

Excepción de caducidad:

La Ley 1437 de 2.011 en su Artículo 7º establece:

La Demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo cuando:

"...b)... etc...

"...d)... De dirigir contra Actos o omisiones del Poder Ejecutivo o...

Consecuentemente, los actos producto del silencio de la administración, igual al que se demanda en el presente caso, no están comprendidos a la excepción de caducidad.

En Reiterada Jurisprudencia del Honorable Congreso de Estado, en su Decreto 1000:

(-) el Silencio Administrativo es prueba irrefutable del abusus cometido por la Administración, más se viola el Derecho Fundamental de Político, de quien nula lo estable, por lo que permitir el cumplimiento de la demanda, genera su arbitrariedad resultaría a todos dar la impresión de que el Poder Ejecutivo Administrado, ya que mientras la Entidad no pierde competencia para pronunciarse, el perjudicado con el acto ficto negativo si estaría privado de la oportunidad de demandar.

En virtud de garantizar el debido proceso en la Administración Pública, la Administración de Justicia, y a fin de que el principio de prevalencia del Derecho Sustancial, se puede concluir que en el presente caso, es PROCEDENTE la presente Acción, toda vez que no ha caducado. En este sentido, solicite al señor Juez que admita la presente Demanda, teniendo en cuenta que se ha configurado el ACTO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, fruto de la Policyta elevada por el demandante el 17 de Julio de 2018, pese a la fecha de presentación de esta Acción, no se ha dado respuesta de fondo a lo pedido en dicha solicitud, quedando agotada la vía gubernativa en los términos del artículo 83 de la Ley 1437 de 2.011.

NO INTROVERTIMIENTO DEL Poder Ejecutivo: la culpa es tuya

En el presente caso se está sometiendo a control de legalidad un Acto Administrativo que está incidiendo sobre la aplicación integral de un régimen pensional, y el correcto pago y un derecho prestacional claro, indiscutible, inalienable, irrenunciable e irrenunciable, como lo es la Pensión Ordinaria de Jubilación que devenga al poderdante de manera habitual y periódica, pagándosele una mesada por un valor diferente al que legalmente le corresponde; evidenciándose que la parte demandada ha creado un nuevo régimen pensional, el cual está integrado con requisitos formales de la Ley 30 de 1.985(tiempo de cotización y edad) y son claramente exclusivos del régimen general de pensiones como lo es moneda, el efecto y el 12% (12%) y la tasa anual de incremento a un año la cual es 11.5%, pago de fondo 1.200.000.

ABOGADOS DE FAMILIA - ABOGADOS SPECIALIZADOS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Los incrementos pensionales son de aplicación integral, o se aplica uno, o se aplica el otro, pero a un pensionado no se pueden aplicar aspectos de un régimen y complementarlo con formalidades del otro, situación que **conlleva a una vulneración al principio de inescindibilidad de la Ley**, puesto que la demandada le está aplicando elementos del régimen General de Pensiones, a un docente que por mandato de la Ley y la Constitución Nacional, pertenecen al régimen exceptuado.

El régimen pensional aplicable a un docente oficial se define por su fecha de vinculación y los requisitos exigidos por dicho régimen están enmarcados dentro de una norma de orden público, por lo cual no pueden ser negociados ni conciliados.

El punto, más allá de que se debe individualizar actualmente la mesada pensional, no es la negociación ni conciliación por alguna de las partes de este proceso, sino que dicho incremento debe corresponder al que señala la norma que está rigiendo su mesada pensional.

Es importante que se debe desconocer de la mesada pensional en calidad de aporte si es una de solidaridad en salud, es decir si es consignado en el régimen pensional aplicado al Pensionado, y este no puede ser modificado, negociado o conciliado a beneficio de alguna de las partes.

De acuerdo a lo establecido en estos apartados, la calidad de imprescriptibilidad e inalienabilidad, plantea que mientras el pensionado esté devengando su mesada pensional, si debe de pago del aporte al sistema de salud, es obligatorio, sin que el pensionado pueda renunciar a dicho pago, o que este le llegare a ser cesado por prescripción temporal; luego al igual que la mesada pensional es vitalicia, la obligación de pago del aporte a salud también lo es, ya que son coexistentes.

¿Pueden las partes negociar cuales son las reglas se le aplique al pensionado y cuales no; o determinar un porcentaje fijo como fórmula de incremento anual para la mesada pensional, o acordar en fórmula conciliatoria que el aporte al sistema de salud sea del 3%?

Las partes en este proceso no pueden trascender el objeto de la Litis, ya que se trata de la aplicación integral de normas de orden público, cuyos ordenamientos y requisitos se encuentran debidamente consignados y determinados de manera precisa en la Ley, (régimen pensional aplicable a la demandante); y por la misma razón, son derechos **inalienables, irtransferibles, innegociables, inmodificables, imprescriptibles e inextinguibles**; razón por la cual no es procedente que se someta a conciliación el incremento de la mesada pensional.

La no exigencia de la conciliación extrajudicial como mecanismo de procedibilidad fue establecida por LA SUBSECCIÓN 1. SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, en providencia del 1º de septiembre de 2003 Exp.00317-2003-1-1, Alfonso Mungas Rincón, donde se sostuvo que esta clase de derechos no son conciliables como requisito de procedibilidad porque los derechos pensionales no pueden ser objeto de conciliación por ser mínimos e transigibles.

El Honorable Consejo de Estado manifestó que:

(Véase el texto íntegro fuera del texto original)

"Para efectos de decidir sobre el carácter de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, es indispensable no perder de vista que son materia de conciliación, derechos que tienen el carácter de mínimos y transigibles, estos son los autorizados por el artículo 53 de la carta fundamental, es que no es referencia al art. 18 Constitucional al establecer dicho requisito limitando los derechos fundamentales en su ejercicio y en su cumplimiento considerando que ha causado el derecho a la pensión,

TORRES & TORRES - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO - PENAL

por cumplir los requisitos señalados en la ley, las partes involucradas en la eventual controversia judicial, no están en posibilidad jurídica de conciliar tal derecho. Él, como se sabe, es de carácter imprescriptible e irrenunciable, las condiciones para su reconocimiento están señaladas en la Ley y ella no puede ser objeto de negociación por ninguno de los oponentes, por ser de carácter público. La anterior, es la razón de ser del conciliación, el acto collateral en la ley, para exigir la conciliación extrajudicial, como requisito de procedimiento legal en el contencioso administrativo tienen, cuando los asuntos sean conciliables... de lo contrario el legislador no hubiera consignado allí la frase. Las razones que anteceden son suficientes para concluir que, tanto el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué como el Tribunal Administrativo de Tolima, al rechazar la demanda por las razones consignadas, incurrieron en violación de los derechos de acceso a la administración, la justicia y el debido proceso del señor....."

.....(-) De conformidad con lo señalado en el inciso segundo del numeral 1o del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo), no será necesario el procedimiento previo de conciliación, cuando una entidad Estatal o su agencia demande la nulidad de sus propias actas.

Que en consideración a lo antes citado, por sustitución de medida legal, es legítimo conciliarse cuando es la entidad y no el administrado, quien demanda a cerca de un derecho de carácter laboral o pensional, tampoco está en posibilidad jurídica de conciliar tal derecho. Pues en esto es a lo que se aplica lo para uno de los extremos procesales, también lo es para el otro, es el principio Constitucional de igualdad y de defensa.

El precedente Jurisprudencial anteriormente citado debe ser fielmente acatado por las autoridades judiciales, quienes estén obligadas a ceñirse por los pronunciamientos emanados de su superior jerárquico (precedente vertical), además en el caso de la nulidad de ejecutorio cumplimiento tal convención figura en el Artículo 12 y 132 del Decreto 1000, y en el Artículo 114 de la Ley 1393 de 2.010.

VI. NORMAS VIOLADAS

La presente Acción se fundamenta en el Artículo 138, 160 numeral 2, 103 y 104 de la Ley 1437 de 2.011 (causales generales de nulidad de los actos administrativos); igualmente en las Leyes citadas a continuación como normas violadas:

- ❖ Constitución Pol. Colombiana: Procedimientos administrativos, Art. 1.º, 2.º, 3.º, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 121, 125, 209.
- ❖ Ley 1437: artículo 137. Referente a las causales generales de nulidad de Los Actos Administrativos.
- ❖ Ley 71 de 1.993: Artículo Primero.
- ❖ Ley 33 de 1.985.
- ❖ Ley 91 de 1969: Artículo 16 numeral 1º "Moral".
- ❖ Ley 115 de 1994, artículo 115.
- ❖ Ley 100 de 1.993: Artículo 279.
- ❖ Decreto 100 de 1.993: artículo 12.
- ❖ Ley 700 de 2001: Artículo 4º.

A CORDES & A CORDES - ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

- ❖ Ley 177 de 2003: Artículo 9º Parágrafo 1º.
- ❖ Ley 813 de 2.003: Artículo 31.
- Art. 31. – (Decreto 177 de 2003)
- ❖ Acto Legislativo 61 de 2.005: párrafos transitorios Nº 1 y Nº 2.

ARTICULO 1º. DE LA CONSTITUCIÓN

Teniendo en cuenta las normas citadas como violadas, podemos asegurar que con el Ley 177 de 2003 (Decreto 177) se configura por el silencio administrativo que la entidad Entidad para la Gestión del Personal Docente por el Mandato el día 17 de Julio de 2.011 no ha incurrido en las causales de Nulidad contempladas en el artículo 137 de la Ley 14.37 de 2.011; igualmente se ha omitido la aplicación de la normatividad que regula la pensión de los docentes que se vincularon al Magisterio oficial con antelación del 27 de Junio de 2.003, y se está desconociendo flagrantemente las normas específicas y complementarias que determinan la forma en que debe ser reajustada dicha pensión y el sistema que se leca cesantea de la medida preventiva para garantizar el sistema de calificación protegido a docencia.

En el Artículo 1º de la Constitución, Párrafo Nacional, incorpora, los fines hacia los cuales dirige el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al constituyente a la elaboración de la documentación matriz la situación fundamental del Estado; la misión política de toda la normatividad; los valores que la Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos. Tal y como lo ha sostenido la H. Corte Constitucional, “El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales que señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas basado en ese diseño a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ésta. Los valores precedentes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetos a toda la Constitución; y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, ricos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan. El Preámbulo goza de una indeterminación en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, todo acto jurídico de índole legislativa o de otro nivela – que desconozca o quebrante el diseño de los fines constitucionales, lesionará la Constitución porque traiciona sus principios”.²

En el preámbulo de la Constitución, están instituidos como **Valores Constitucionales**: la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz; la garantía de un orden político, económico y social justo; como tales, son fines a los cuales se quiere llegar y, por ello, determinan el sentido y finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico. No obstante su carácter programático, su enunciación no debe ser entendida como la manifestación de un deseo o un querer sin influencia normativa, sino como el conjunto de propósitos a través de los cuales se establecen las relaciones entre gobernantes y gobernados.

También ha señalado la Corte Constitucional³ en cuanto a la fuerza vinculante de los valores constitucionales que éstos “se caracterizan por su indeterminación y por la

² Corte Constitucional, M. 1.5.2.01.000-0-072-001602, Dr. F. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO y Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 1996, M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

CORRERES DE TOLERANCIA AL POGO AL DÍA SERVICIALES EN DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

flexibilidad de interpretación, pero no por ello pueden resultar indiferentes para los operadores jurídicos, quienes con base en el principio de concordancia, preferencia de las normas constitucionales deben conducir la aplicación del derecho por los medios o fines predeterminados por el Constituyente, es decir, “...una que guarda una intención que persiga fines diferentes o que obvia u忽略 el lecho de anuncios estrictos consagrados constitucionalmente, resulta hedionda y por consiguiente, debe declararse contraria a la Carta”. En otras palabras, como a la Constitución atribuye las funciones de legitimación, seguridad jurídica y justicia, al administrador público, disposiciones similares al artículo 121 de la Constitución, que establecen el ordenamiento superior. En éste sentido, la violación del trabajo y del sueldo como valores constitucionales por parte de un acto administrativo, debe necesariamente producir su nulidad por ser contrarios al ordenamiento superior.

Por otro lado, el artículo 3 de la C.P., al establecer que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, [...] servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, nos está diciendo que las autoridades públicas exclusivamente pueden hacer lo que se les permite. Tal aseveración, encuentra sustento aún más claro en el artículo 121 Constitucional (que también sirve como norma violada), que de manera clara y contundente prescribe “...el que incumbe al Estado, podrá ejercer funciones públicas de las que le atribuyan la Constitución y la ley”. Es así como se da fundamento Constitucional al Principio de Legalidad que debe orientar y regir las actuaciones de todas las autoridades de la República.

No cabe duda entonces que si una autoridad actúa, lo hace lo que hace de acuerdo con las normas superiores que le otorgan la competencia (C.P., art. 121), siguiendo los procedimientos establecidos (C.P., Art. 29) y buscando cumplir con los fines del Estado (C.P., art. 2). Por consiguiente, si un acto administrativo se expide violando el Principio de Legalidad, no hay más opción que declarar su nulidad.

La violación a los artículos anteriormente mencionados es concreta, en el sentido que la entidad accionada a través de su actuación para decidir mediante el resarcivo, este administrativo desconoce el derecho sustancial que posee mi mandante a que se le pague correctamente su mesada pensional, a que no se le descuenten valores excesivos a título de aporte al sistema de salud, y a que su pensión sea ajustada anualmente conforme a la normatividad especial y no a la contenida en el régimen general de pensiones; concluyendo en igual medida los siguientes derechos de carácter fundamental:

- Derecho de Igualdad (artículo 13): en tanto que aplica en forma discriminativa la normatividad que regula el correcto pago Pensión de Jubilación para los regímenes especiales exceptuados, bajo el argumento de que el derecho cumplimiento a un mandato legal, que de conformidad al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución, artículo 143 del C.S.T, debió ser obviado por la entidad. Es decir, que mientras mi mandante tiene que soportar que la entidad accionada le aplique desventajas a sus mesadas pensionales y adicionales, los demás jubilados de sectores públicos que gozan de un régimen especial, reciben sus mesadas con la deducción indicada en la Norma especial y no con base al régimen general de pensiones, tal como se le está aplicando a mi mandante.
- Derecho a la Seguridad Social (artículo 43): en tanto que no se está respetando en cabida forma las mesadas de pensiones, ni se está resguardando el salario conforme lo dice su norma especial, basándose en la citada legislación en este artículo constitucional en su artículo 7º (adicionado con el Acto legislativo 01 de 2005), que al tenor dice: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y

**AVOCADO EN DERECHO LABORAL - ADJUDICATIVO
ABOGADO EN DERECHO LABORAL - ADJUDICATIVO**

desvirtuar la función social de la pensión con la ley, por el que efectivamente dejó de pagar, corromper o reducir el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme al derecho.

- Derecho al Mínimo Vital Móvil y Principio de Favorabilidad (artículo 53); pues es evidente la afectación de los intereses económicos de el docente, al descontarse de manera excesiva por un servicio de salud, creando un perjuicio económico sobre el bienestar social que representa el correcto pago de la pensión de jubilación y de sus mesadas adicionales. Así mismo, se evidencia el perjuicio que se causa por no actualizar la pensión conforme lo dispone el Artículo primero de la Ley 71 de 1.988, consecuentemente su mesada pensional va perdiendo poder adquisitivo frente al Salario Mínimo Legal o social.

VIOLACIÓN DE LA NORMA SUPERIOR

La Ley 812 de 2003, conocida como la Ley General de Educación, en su artículo 115, estableció que:

Artículo 115.- Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas de régimen especial del Estatuto Básico y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 81 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y el ajuste periódico de las pensiones y salarios legales.

En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores estatales.

Es decir, entonces, que para el efecto de liquidación de una pensión de jubilación a un docente vinculado al magisterio público debe aplicarse la normatividad legal que de ninguna forma desmejore o cause un perjuicio sobre la mesada a pagar al pensionado.

ARTÍCULO 81. ESTIMACIÓN DE LA PENSIÓN DE LA LEY 812 DE 2003

EL FONDO MAGISTERIAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO, dio una incorrecta aplicación del Artículo 81 de la Ley 812 de 2.003, la cual a la poste resultó ser totalmente favorable para sus arcas; vulnerando los derechos adquiridos de los docentes que se vincularon hasta el 26 de junio de 2.003, los cuales fueron protegidos por el mismo artículo 81 de la citada Ley; creándose de esta manera una situación fáctis totalmente desfavorable para los pensionados y una evidente vulneración de los ordenamientos de dicho articulado, del espíritu de la norma y de la verdadera intención del legislador, vulnerando los derechos prestacionales de los educadores colombianos.

La Ley 812 de 2.003, en su artículo 81 señaló que:
(Resaltos y negritas fuera del texto original)

TORES & TORRES - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ANTECEDENTES JURÍDICOS

Régimen prestacional de los docentes oficiales. *El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.*

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen prestacional de acuerdo a lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y 737 de 2003, con los requisitos previstos en él, con una edad de cotización de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 51 de 1990, los establecidos correspondientes a riesgos profesionales según lo que hoy tiene establecido el Régimen de los efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 737 de 2003, manteniéndose la misma distribución que existe para cumplir con sus obligaciones; la cual, sólo si el monto de estos recursos lo herá el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, será descripto por el Gobierno Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de Profesionales del Docente establecido en el Decreto 1572 de 2003, los beneficios establecidos vigentes a la expedición de la presente ley y la remuneración a los docentes en el momento en que se desprende de la ordenada en el presente artículo.

El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero si no es contratado en su función con aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía e igualdad, cosa permitida seleccionar la entidad fiduciaria que ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en subcuentas independientes, correspondientes a los recursos de pensiones, salud y salud.

El valor que correspondería al incremento en la cotización del año anterior, sin concepto de la aplicación de este artículo, será financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de cuenta previsto en la Ley 32 de 2002 y hasta por el monto de dicha cuota, sin detrimento de la obligación de la Nación por el pago de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que le entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan cumplir con su obligación patronal.

Es claro la Norma citada señala que para los docentes que se encuentran vinculados al servicio público oficial los docentes docentes que ya no habían sido afiliados al FOIMAG, seguirán gozando del régimen que se encontraba activo antes de entrar en vigencia la aludida ley, ordenamiento que se encuentra en consonancia con los principios legales laborales y con los pronunciamientos Jurisprudenciales en donde se indica que si régimen prestatario que se debe aplicar a los empleados públicos, es el que se encuentre vigente al momento de la vinculación, y no el que se encuentre vigente al momento de pensionarse;

LA CEDERMA & FIDUPREVISORA - ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

entendiéndose que la intención del legislador y/o el espíritu de la norma fue delimitar el régimen prestaional de los Docentes oficiales señalando quienes pertenecen al régimen exceptuado y quienes al régimen general de pensiones, distinguiéndose con precisión dos grandes grupos:

1. Los que se vincularon hasta el 23 de Junio de 2.003, a quienes se les aplicará el régimen prestaional que se encontraba vigente antes de dicha fecha, siendo éste el contenido en la ley 91 de 1.989, con remisión a la Ley 33 de 1.985, Normas que en lo referente al aporte que deben realizar los docentes pensionados al sistema de salud, ordenan un descuento de la mesada pensional en un monto equivalente al 5%, deducción que también es aplicada a los pensionados activos.
2. Los que se vincularon a partir de 27 de junio de 2.003, a quienes se les ha direccionado para que sean incorporados al Régimen General de pensiones contemplado en la Ley 100 de 1.993 y 797 de 2.003, normas que en lo referente al aporte que deben realizar los pensionados al sistema de salud, ordenan un descuento de la mesada pensional en un monto equivalente al 12%, para lo cual no se aplica la mesada adicional.

Como conclusión de lo anteriormente ilustrado, se colige que la norma solo tiene como finalidad **el señalar quienes pertenecen al régimen pensional exceptuado y quienes pertenecen al régimen general de pensiones**, ordenándose la aplicación de acuerdo a los Derechos y requisitos que exige la aplicación de cada uno de estos dos regímenes al momento de conceder una pensión de Jubilación.

EL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS PENSIONADOS CON LA LEY 812 DE 2.003

Desde el momento en que la Ley 812 de 2.003, entró en Vigencia, (27 de Junio de 2.003), El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FONAMAG), actuando conforme a su puesta en aplicación de lo contemplado en el Artículo 81 de la precitada Norma, ordenó a la FIDUPREVISORA (Entidad que tiene a su cargo el pago de las mesadas pensionales del Magisterio), incrementar el monto del 6% que venían aportando los docentes pensionados para al sistema de salud, a un porcentaje equivalente al 12% de cada mesada pensional, incluidas las adicionales, directriz que también fue establecida para los nuevos pensionados, lo anterior con un supuesto fundamento legal según lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2.003, en donde se indica que: la tasa de cotización de los afiliados al FONAMAG, es la establecida en la Ley 100 de 1.993 y 797 de 2.003, Normas en donde se establece el 12% como aporte al sistema de salud.

No obstante la específica discriminación que la Ley implementó para su aplicación, la cual no distinguió entre quienes quedaron cobijados por las normas específicas en virtud al régimen exceptuado y quienes fueron direccionados al sistema General de Pensiones, y que el incremento en el monto de la cotización es aplicable solo al aporte ya sea para los docentes activos o pensionados con sus respectivas y ordenadas descuentos de las mesadas adicionales y adicionales de todos los pensionados en cuantía igual al 12%, tal como se exige en la Ley 100 de 1.993.

La Ley que se encontraba vigente antes del a Ley 812 de 2003, es la ley 91 del 29 de diciembre de 1988, "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

ARTÍCULO 80. EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Magisterio", la cual tiene entre sus fuentes de financiación el aporte que deben realizar los pensionados de su mesada pensional. (En cuanto lo dispone en su Artículo 1º numeral 3º:

"Artículo 8º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estará constituido por los siguientes recursos:

(-)... 3. El 5% de los ingresos que los docentes y trabajadores del Magisterio obtengan de pensiones nacionales, tanto aportadas como no contributivas.

Es evidente que cuando la norma señala que para los Docentes afiliados al FNPSPN, el valor de la tasa de cotización es el establecido en el Régimen General de Pensiones, está comprendiendo que el sueldo vinculado a la tasa de cotización, y sobre el porcentaje que se les debe dedicar a su salario, el 5% que en este caso coincide con el aporte que realiza el empleado, por eso la norma se refiere así a cuando señala: "distribución de la cotización entre trabajadores y empleadores".

DISTRIBUCIÓN DE LA COTIZACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES.

Con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2.003, los empleadores, en este caso los entes territoriales certificados y descentralizados, se vieron afectados con el incremento en la tasa de cotización de los docentes, puesto que en su titularidad de cotizaciones tienen la obligación de elevar el 3% de la correspondiente cotización. Tal orden por lo exige la Ley 100 de 1.993 y la Ley 812 de 2.003.

En razón a lo anterior y en un hecho que constituye una prueba irrefutable de que la aplicación del 12%, es solo para los nuevos afiliados, y que la respectiva distribución de aportes son acciones que se deben realizar el empleador, devolviendo los docentes que pasan a tales pensiones o bien continúan cotizando, y no de los casos de pensional: fijo la compensación que la misma Ley contempla a favor de los Empleadores, ya que se ordenó a la Nación compensar el incremento en la tasa de cotización con recursos del sistema general de participaciones; tal como me permitió ilustrado:

Artículo 81. Negocios y resoluciones fuera de su régimen.

(-)...El valor que correspondería el incremento en la cotización del empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será financiado con recursos del Sistema General de Participaciones y no por la cuota que la Nación pague al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Es claro entonces, que lo ordenado por el Artículo 81 de la Ley 812 de 2.003, no fue elevar el monto del aporte para sañar a un porcentaje equivalente al 12% de la mesada pensional de los docentes, sino que dicho incremento se debe aplicar al empleo de Docentes nacidos y a los que se les vincula a través de los Docentes que se vincularon después del 26 de Junio de 2.003, los cuales deben ser regidos conforme a la normatividad que regule el sistema General de Pensiones y que actualmente exige una cotización del 12% con una distribución de aportes del 4% por parte del trabajador y del 8% por parte del empleador, tal norma lo dispone la Ley 100, de 1.993.

DIFERENCIA ENTRE APORTES Y COTIZACIÓN.

**ESTUDIO DE CASO - AFILIACIÓN AL FONDO DE
PENSIONES Y SUS DIFERENCIAS CON
LA AFILIACIÓN EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO**

Colectivamente se puede inferir que aparte de lo mismo que cotizar, puesto que estas dos acciones están encaminadas a fortalecer de manera solidaria el sistema de salud que cubre las contingencias de los asegurados; no obstante, técnicamente sí existen grandes diferencias, ya que mientras el aporte es un cargo que es totalmente sufragado por el pensionado; En la cotización existe una división de aportes en donde el empleador sufragará el 8% y el trabajador el 4%. Igualmente existen diferencias que no son contractuales, ya que mientras la una es un aporte de una mesada pensional, la otra depende de una relación laboral.

Para mayor ilustración, me permito señalar los fundamentos legales que contienen las diferencias arriba mencionadas:

Norma del régimen de pensiones:

Ley 51 de 1.989, artículo 8 Numeral 5º (recursos que financian al FOMAG):

Negritas y resaltos fuera del texto original:

Numeral 5º: El 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo incluidas las mesadas adicionales, por parte aporte de los pensionados.

Norma del régimen General de pensiones:

El artículo 17 de la Ley 100 de 1993, que fue modificado por el Artículo 4 de la Ley 797 de 2.003, quedó definido así:

Negritas y resaltos fuera del texto original:

Art. 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.....

(-1) La obligación de cotizar cesa si momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

De conformidad con las normas anterioresmente citadas, se colige que:

COTIZAR: Es un pago compartido entre Empleador y el Trabajador, el cual garantiza la protección del trabajador en un sistema de Salud, y sobre el cual se proyectará el pago de su futura mesada pensional, cotización que incide directamente en el valor de la pensión, los factores de TBL, el incremento por mayor número de cotizaciones cotizadas, etc..

APORTAR: Es el valor que se deduce de la mesada pensional para fortalecer el sistema de salud de la entidad prestadora de dicho servicio (E.P.S., y/o FOSYGA), y que está a cargo solo del pensionado, sin distribución de aportes y sin aportes compensatorios por parte del gobierno Nacional.

DIFERENCIA ENTRE AFILIADO Y JUBILADO

La afiliación a un fondo de pensiones solo se realiza una sola vez en la vida, y ésta se formaliza con la simple presentación del formulario de afiliación por parte del

10

ESPECIALISTAS EN DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL DESARROLLO HUMANO

empleador; no se requiere de un tiempo de permanencia mínimo y/o de alguna condición adicional especial. La prima o cotización al fondo de Pensiones es un suceso que determina el régimen pensional del trabajador afiliado y los derechos e beneficios que adquiere el afiliado de acuerdo con los leyes vigentes en la fecha de su vinculación; situación que se presenta tanto en el régimen público como en el régimen general de pensiones.

Después de la primera afiliación, se puede presentar interrupción en períodos o cambio de trabajo, pero esto no configura una desvinculación del FOMAG ni de su afiliación, ya que no existe la figura jurídica de la desafiliación; sino que simplemente se presenta una pausa mientras se realizan nuevos períodos de cotización por parte del nuevo empleador; es decir, que la afiliación al fondo pensional puede estar activa o inactiva, pero esta inactividad no tipifica una desvinculación del afiliado, ya que legalmente solo se permite la desafiliación del fondo para el caso cuando no le ha efectuado el aporte obligatorio de 10% del salario bruto del docente afiliado.

Los Docentes oficiales de Colombia, con afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por una sola vez en su historia laboral, hecho que se verifica con la primera vinculación sin importar la modalidad del contrato: nombramiento temporario en propiedad, Orden de Prestación de Servicio, Horz Cátacta o un simple reemplazo por licencia. Por mandato legal, el docente debe pagar por dicha afiliación y/o por una reactivación de la afiliación, el equivalente a una tercera parte del primer salario, valor que directamente se descontado por el empleador, quien actúa en su plenaria de lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 3 de la Ley 81 de 1.993:

Numeral 2:

Negrillas y resaltos fuera del Texto original:

Las cuotas personales de inscripción equivalentes a quinientos ochenta mil pesos mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores aumentos.

Cuando a un docente le pagan su primera mesada pensional, **NO LE DESCUENTAN LA TERCERA PARTE DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL**, por concepto de afiliación al FOMAG.

De lo anteriormente expuesto se colige que El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no distinguió entre quienes ostentan la filiación de Afiliado y quienes la calidad de pensionado, creando una generalización al momento de implementar el aumento en la tasa de cotizaciones que ordenó el Artículo 81 de la Ley 812 de 2.003, procediendo a aplicar un porcentaje igual de descuento en la tasa de aporte de las cotizaciones pensionables y en el salario devengado como docente activo.

CREACIÓN DE UN TERCER RÉGIMEN Y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY

El Artículo 279 de la Ley 100 de 1.993, excluyó al magisterio de la aplicación del régimen General de pensiones creado por la misma Norma, creándose de esta manera el Régimen Exceptuado.

Posteriormente el Legislativo decidió dar fin al Régimen Especial o Exceptuado que gozaban los Docentes oficiales; para tal fin, creó la Ley 612 de 2.003, la cual en su artículo 81 determinó quienes quedaban cobijados por el Régimen Especial Exceptuado, y quienes serían incorporados al Sistema General de Pensiones;

ABOGADOS D'ARTORES & CÓPAGOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

mandamiento legal que fue ratificado Constitucionalmente mediante el Acto Legislativo 01 de 2.003, el cual fijó como fecha límite al 31 de Julio de 2.010, para dar acabar de manera definitiva los Regímenes especiales, salvo presidente y fuerzas militares.

Del anterior recuento normativo y tal como se ha venido ilustrando en esta demanda, así lo referente al Magisterio oficial, la Ley y la Constitución determinaron dos grandes grupos, los cuales son uno perteneciente a un régimen propio, el cual se encarga de los pliegos legales intrínsecos al mismo y con amplia diferencia del otro; es así como en lo referente a los docentes oficiales de Colombia se distinguen estos dos Regímenes:

1. Los que se vincularon hasta el 26 de Junio de 2.003, a quienes se les aplicará el régimen prestacional que se encontraba vigente antes de dicha fecha, siendo éste el contenido en las ley y 81 de 1.989, con remisión a la Ley 33 de 1.985; el cual se ha determinado como Régimen Especial o Exceptuado.
2. Los que se vincularon a partir de 27 de junio de 2.003, a quienes se les ha incorporado el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, contemplado en la Ley 100 de 1.993 y 797 de 2.003; con una pequeña transición para los que se vincularon entre el 27 de Junio de 2.003 y el 31 de julio de 2010, quienes tendrán una favorabilidad en el requisito de edad, el cual quedó establecido en 57 años para hombre y mujeres. Estos docentes ya no están cobijados por normas especiales y pertenecen al Régimen General de Pensiones.

Actualmente la mayoría de los docentes que se encuentran pensionados pertenecen al régimen exceptuado, puesto que se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 312 de 2.003. Es importante precisar que los Docentes que se vincularon con posterioridad a la precitada fecha, todavía no han cumplido los requisitos para acceder a la pensión de Jubilación, salvo los casos aislados de Pensión de Invalidez y/o de Sobreviviente, caso en términos generales todos los Docentes Pensionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 33 de 1.985 en remisión a Ley 81 de 1.989, y pertenecen al régimen exceptuado determinado en el artículo 81 de la Ley 812 de 2.003 y el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

La Constitución Nacional, La Ley y la Jurisprudencia han determinado que los Regímenes Funcionales son leyes de aplicación integral, en donde el único para poder acceder a la Pensión, debe someterse a todos los ordenamientos de la Ley que lo enmarca y cumplir la totalidad de los requisitos allí establecidos.

Del contenido del artículo 53 de la Constitución Nacional, emergen los principios de Fervoridad y Condición más Beneficiosa, los cuales permiten a los aspirantes de una Pensión de sobreviviente y/o Invalidez, accogerse a la normatividad pensional que se adecue a su historia laboral; pero aun así, los Regímenes Pensionales son excluyentes, es decir, se aplica uno o se aplica el otro, pero no se pueden aplicar por partes o por rétazos, no se pueden mezclar las condiciones del uno con los requisitos del otro, a fin de lograr una situación que le permita un beneficio particular a un tenor en ignorancia acerca de los principios de Inexcluidabilidad de la ley.

La situación fáctica de los Docentes pensionados que se vincularon con anterioridad al 27 de Junio de 2.003 y que por mandato de Ley están excluidos del Régimen General de pensiones, está generalizada por el reconocimiento de una medida pensional que fue concedida bajo los ordenamientos del régimen Especial exceptuado, pero que paulatinamente ha venido siendo modificada y/o condicionada bajo el amparo de disposiciones legales que son propias del Régimen General de Pensiones; situación que conlleva a la creación de un nuevo régimen pensional el cual está compuesto de elementos del Régimen especial y elementos del Régimen General de Pensiones, tal como me permite señalarlo:

11

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADJUDICATIVA MÉDICA

La pensión de Jubilación y la mesada o "residual" de los Docentes de Calidad que se vincularon antes del 26 de junio de 2.003, viene determinada por los siguientes aspectos:

Requisitos:

55 años de edad y 20 de servicio, tal como lo ordena la Ley 33 de 1.985 con remisión a la Ley 81 de 1.989. (Aspecto del Régimen Especial).

Desducciones para salud:

Se le descuenta el 12 % de cada mesada Pensional, tal como se establece en la Ley 100 de 1.993. (Aspecto del Régimen General de Pensiones)

Desducciones sobre las mesadas adicionales:

Se les descuenta el 12 % de cada mesada adicional de Junio y Diciembre.

En este caso se está aplicando el porcentaje estipulado en la Ley 1.6 de 1.988 (12%), pero sin tener en cuenta que dicha Ley prohíbe aplicarle deducciones para salud a las mesadas adicionales.

Para justificar dicho descuento, el FC. A.C. invoca lo establecido en la Ley 81 de 1.989, en donde sí se permite descontar de las mesadas adicionales hasta un límite el porcentaje allí establecido, el cual es 5% del valor de la mesada.

(Aquí se mezclaron tanto elementos del régimen general, como elementos del régimen especial).

Ajuste anual de la Mesada pensional:

La Pensión de jubilación es ajustada en la primavera de cada año, con base al incremento del I.P.C. decretado por el DANE; tal como lo ordena el artículo 14 del la Ley 100 de 1.993. (Aspecto del Régimen General de Pensiones)

Tal como se ha detallado, el Fondo Nacional de Pensiones o "Sociego del Magisterio", ha instituido un nuevo Régimen Pensional que es el que rige del año 2003 en adelante, sin fundamento normativo y que fue implementado con el único objetivo de llenar sus arcas; toda vez que éste está integrado con la mezcla de los requisitos y aspectos del Régimen especial y del aspectos del Régimen General de Pensiones, que le son más favorables, sometiendo la mesada pensional de los docentes a unas condiciones distintas a las establecidas intrínsecamente en cada Régimen en particular, olvidando que implica una clara y expresa violación al principio de la accesibilidad de la ley, con el único propósito de beneficiar a un tercero.

El Fondo Nacional de Pensiones "Sociego del Magisterio", mediante acuerdo 001 de 2003, autorizó para aplicar la legislación de la ley 821 de 2003 para la jubilación, el valor de los cuales se basa en el concepto de aporte al sistema de salud y el porcentaje con el que debe resumarse la mesada pensional, aunque no sea una medida constitucional, son excepcionales al régimen general, pero en el presente caso se observa que se creó un régimen pensional diferente al legalmente establecido para los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2.003, vulnerando preceptos legales como los artículos 13,48 y 53 de la Constitución Política, y las Leyes 71 de 1.978 - 33 de 1.985 - 91 de 1989 y 812 de 2003.

La Honorable CCRTE CONSTITUCIONAL, mediante sentencia C-439 de 2004, resolvió un cargo de inconstitucionalidad, que un ciudadano formuló contra el párrafo 4º del artículo 81 de la ley 821 de 2003, pues éste consideraba que dicha ley debió establecer una compensación que equípara paulatinamente el porcentaje en que se incrementaría el aporte al sistema de salud que debían pagar los pensionados del fondo del Magisterio.

**ESTUDIO SOBRE EL RÉGIMEN DE SALUD
COMO UNA PRESTACIÓN AUTÓNOMA Y SEPARABLE
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

tal como se implementó cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993; que tal medida no debía considerarse una violación a la igualdad.

Frente a lo anterior, el Tribunal:

SENTENCIA C-436 DE 2004:
(Nagritas y resaltos fuera del texto original)

“... Conforme a lo anterior, si efecto de igualdad no está llamado a prosperar para dentro la regulación de la prestación en salud no puede ser dividida ni separada sin sujeción autónoma y separable. En efecto, esa cotización está ligada al conjunto de los servicios de salud prestados al trabajador que requieren un régimen específico, pues ciertos servicios son exclusivos y solo están contemplados en la Ley 100 como lo dice otro aparte de la Ley acusada. Y en esas circunstancias no tenía por qué la norma acusada prever el incremento de la cotización en salud de los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio un incremento de su mesada idéntico al previsto por la Ley 100 de 1993, por cuanto el régimen de salud y pensiones es en ciertos casos distinto. Entro la cotización para vivienda y el aumento del régimen, no puede ser considerada una prestación autónoma y separable. La Ley no estaba obligada a prever para el aumento de la cotización en salud de los pensionados del régimen especial, con los dientes un dispositivo que permitiera igualar el aumento que por la Ley 100 de 1993 para el sistema general de seguridad social (...).”

En el mismo pronunciamiento jurisprudencial la Honorable Corte Constitucional puntualiza las diferencias existentes entre Régimen general y el Régimen especial, mediante sus precedentes encuadrados refiriendo la prohibición de mezclar los criterios de uno con los de otro, indicando que estos deben ser aplicados integralmente y que son normas específicas que no pueden ser escindidas en pro del beneficio y/o al arbitrio de un tercero; es así como la Sentencia estableció que:

Frente a lo anterior, el Tribunal:

“... Esta Corporación ha señalado con claridad que quienes se encuentren adscritos a un régimen especial de seguridad social, están obligados a someterse plenamente a su normatividad, sin que resulte válido reclamar la aplicación de los derechos y garantías reconocidos para el régimen común, pues no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más beneficiosa. Y es que el régimen especial para... afiliado a un régimen especial pueda invocar aspectos puntuales del régimen general de seguridad social implicaría la creación de una lex tedia, que sería un verdadero tercer régimen, compuesto por algunos aspectos del sistema general de seguridad social y otros del régimen especial. Lo anterior implicaría la creación de una legislación contradictoria y contraria a la normatividad de la entidad de seguridad social. Sin embargo, la Corte ha precisado que lo anterior no significa que sea imposible formular cargos

**ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO**

de igualdad por eventuales discriminaciones que hayan podido sucederme en un régimen especial...».

RENTO QUE DESTINA AL PAGO DE LA MESADA DE JUBILACIÓN LOS DOCENTES OFICIALES DE COLOMBIA.

Actualmente los Docentes pensionados de Colombia, a pesar de haberse vinculado con anterioridad al 27 de Junio de 2.003 y de pertenecer al Régimen Especial y Exceptuado; están siendo regulados con los aspectos del Régimen General de Pensiones, no solo en lo relativo al monto del aporte al sistema de Salud, sino además en lo referente al resajuste anual con el que se actualizan la mesada Pensional.

Desde el momento que entró en vigencia la Ley 812 de 2.003, a los Docentes Pensionados se les está descontando el 12% de cada mesada pensional y de cada mesada adicional de junio y Diciembre, cuando lo ordenado para el Régimen exceptuado es el 5%, establecido en la Ley 91 de 1.989.

En lo referente a los incrementos anuales, la mesada pensional está siendo ajustada con base al porcentaje del I.P.C., reportado por el DANE para cada año y no con base a la misma proporción en la que el Gobierno Nacional resajusta anualmente el salario Mínimo Legal mensual.

Consecuentemente se tiene que de conformidad con los mandatos de la Ley 812 de 2.003, existen dos porcentajes para aplicar a los docentes pensionados, a título de aportes para el sistema de salud:

1. El establecido para los vinculados hasta el 26 de junio de 2.003, que es el 5% establecido en el Artículo 8º de la ley 91 de 1.989, aplicado sobre las 12 mesadas y las mesadas adicionales de junio y Diciembre.
2. El establecido para los vinculados a partir del 27 de junio de 2.003, que es el 12% establecido en la Ley 812 de 2.003, aplicado únicamente sobre las 12 mesadas pensionales, SIN aplicársele dicha deducción a las mesadas adicionales de junio y Diciembre.

Para ratificar lo anteriormente expuesto, nos permitió invocar lo manifestado por El Honorable Consejo de Estado -- sala de Consulta y Jurisdicción Civil, en el cual se respondió a la consulta efectuada por la Viceministra de Educación Nacional, respecto de cuál es el monto que deben aportar los docentes para el sistema de salud, en atención a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2.003 y el acto Legislativo 01 de 2.005:
(Negritas y resaltos fuera del texto original)

DESCUENTO DE LA COTIZACION PARA SALUD DE LAS MESADAS ADICIONALES PAGADAS A LOS PENSIONADOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO - Descuento del aporte para salud por una nueva relación laboral o contractual de servicios permanentes de un pensionado del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio / RÉGIMEN PENSIONAL DE DOCENTE – Según la fecha de su vinculación al servicio estatal.

La doctora Lecia Segovia Capina, Viceministra de Administración Presupuestaria, Días y Fiestas, encargada de las Funciones de la ejecución de la Política de Administración

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**

ESTADÍSTICAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Asimismo, a solicitud de la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Sala I ha constatado en relación con la viabilidad legal de constituir haciendo los aportes para salud a las mesadas adicionales de los pensionados del Fondo y si en caso de una nueva relación laboral o contractual de servicios personales de un pensionado del Fondo, se deben hacer tanto los aportes para salud por causa de ésta, como los establecimientos para condición de pensionado del Fondo, teniendo en cuenta que el servicio de salud no figura entre las obligaciones que el régimen de pensiones establece para el servicio estatal antes del 27 de junio de 2003, que se encuentran pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el descuento de la cotización del 5% para salud se hace sobre cada mesada pensional, incluidas las mesadas adicionales. En el caso de los docentes vinculados al servicio estatal a partir del 27 de junio de 2003, que se encuentran pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cotización del 12% para salud se descuenta de la respectiva mesada pensional mensual, no de la mensualidad adicional a la pensión de diciembre o del pago de treinta (30) días de la pensión que es la totalidad de la mesada del resto del año, según el derecho a estos ingresos que figura en la legislación. 2. Deben cesar tales los aportes de salud de la persona, con destino a una entidad empresaria promotora de salud, tanto por su situación de pensionada del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como por su situación de vinculación laboral o contractual de servicios personales. El descuento de tales aportes debe efectuarse sobre la totalidad de los ingresos derivados de las dos situaciones, con un tope máximo de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

FUENTE FORMAL: LEY 91 DE 1989 - ARTICULO 8 NUMERAL 5 / LEY 91 DE 1989 - ARTICULO 15 NUMERAL 2 LITERAL B / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 142 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 143 INCISO 2 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 131 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 204 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 186 NUMERAL 2 / LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 276 / LEY 233 DE 1995 / LEY 812 DE 2000 - ARTICULO 81 / LEY 797 DE 2003 / LEY 1122 DE 2007 - ARTICULO 10 / LEY 1151 DE 2007 - ARTICULO 160 / LEY 1250 DE 2008 - ARTICULO 1 / CODIGO CIVIL - ARTICULO 27 / DECRETO 806 DE 1998 - ARTICULO 48 / DECRETO 806 DE 1998 - ARTICULO 52 / DECRETO 1703 DE 2002 / ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2005 - ARTICULO 1 INCISO 8 / ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2003 - PARAGRAFO TRANSITORIO 6o

NOTA DE Aclaratoria: Sobre los regímenes pensionales de los docentes oficiales, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 22 de noviembre de 2007, Rad. 1857.

CONSIDERANDO: SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente (E): WILSON ARMANDO GUTIERREZ.

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil diez (2010).-

Radicación número: 11001-00-00-00000-00000-00 (1.988) Actor: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Referencia: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Descuento de la cotización para salud de las mesadas adicionales pagadas a los pensionados del Fondo, según su régimen aplicable. Descuento del aporte para salud por causa de una relación laboral o contractual de servicios personales de un pensionado del Fondo.

(-)
sin modificar estos últimos, (...).

TOMAS & TOMEZ - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

3.2 Los dos regímenes pensionales de los docentes oficiales se aplican simultáneamente en la vinculación al servicio público.

La Sala, mediante el Concepto No. 1857 – Aclaración, del 10 de setiembre de 2009, se pronunció sobre la dictadura de los dos regímenes pensionales de los docentes oficiales, la cual surge de la norma legal contenida en el artículo 137 de la ley 312:

En efecto, la ley 312 del 20 de julio de 2010, “Por la cual se enmienda el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado socializado”, y que según el artículo 137, entró en vigencia el día de su promulgación, el 27 de junio de 2010 (Diario Oficial N° 45.231), dispone en el artículo 3º lo siguiente:

“Artículo 3º. Llegó a su fin el régimen de pensiones para los docentes nacionales, nacionales y territoriales, que se vincularon al servicio público educativo oficial, es el establecido para el registro en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.”

2. Ofc. Corte Constitucional, “Aclaración” 10-09-2009, art. 3º, punto 2º:

(...) Los docentes que se vinculan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de mayor medida establecido en la ley 312 del 20 de junio de 2010, que figura en su cuadro “Regímenes para los docentes nacionales y territoriales”, la cual establece que la edad de jubilación será de 57 años para hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la ley 312 de 2010, las primas laborales correspondientes a riesgos profesionales seguirán siendo de responsabilidad el fondo para las personas.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportos para salud y pensiones establecidas las leyes 117 de 1999 y 1007 de 2004, más la tasa de aporte distinta a la establecida en el artículo 137 de la ley 312, que para el caso de recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones³.

(...)(Recalca y subraya la Sala).

“En efecto, el acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que se expresa dispositivamente en el artículo 190 de la ley 312 del 27 de julio de 2010, establece que se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2010”.

La Sala, en el referido Concepto, luego de hacer el encrucijamiento analista sobre la normalidad aplicable al caso se remite en este momento a la legislación que regula las pensiones de los docentes oficiales de la siguiente manera:

“La última de las preguntas formuladas por los señores Ministros permite concretar el régimen de los docentes, atendiendo a su fecha de vinculación al servicio público docente, a los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 y al régimen de transición consagrado en particular para ellos, así:

El régimen pensional de los docentes oficiales que se estableció en el Acto Legislativo 01 de 2005, fecha de entrada en vigencia de la ley 312 de 2010, es el establecido en la ley 31 de 1989:

El régimen pensional de los docentes oficiales que se estableció en el Acto Legislativo 01 de 2005 es el régimen que resulta de la ley 31 de 1989, “ya que las disposiciones de esta ley

RODRIGUEZ & TORRES ABOGADOS

AVVOCATI E AVVOCATI DELL'AGENZIA DI LEGGE RODRIGUEZ & TORRES

en el futuro, pero con el requisito de la edad cumplida en 57 años para hombres y mujeres.

Si el plazo establecido en el artículo 61 de la ley 01 de 2005 fue declarado ejecutable por la Corte Constitucional el 17 de diciembre de 2010, el 27 de junio de 2011, únicamente por el cargo de inconstitucionalidad, consideraría que la presente violación del principio de igualdad.

Atendiendo los antecedentes del párrafo transitorio 1o del artículo 1o del Acto Legislativo 01 de 2005, el 31 de julio de 2010 no es aplicable como fecha de expiración de ninguno de los regímenes pensionales constitutivos para los docentes al servicio oficial".

De acuerdo a lo anterior, procede la devolución del descuento de la cotización para salud de los trabajadores del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según uno u otro régimen, que "frente la San".

En consecuencia, en el caso de los trabajadores vinculados al servicio educativo a 100% antes del 1o de julio de 2010, que son pensionados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, **por disposición expresa de la ley es viable efectuar el descuento del 5% de cada mesada pensional, incluidas las mesadas adicionales.**

ARTICULO 7º

1. Se debe distinguir según el régimen pensional aplicable:

~~1. Los trabajadores que tienen vinculación laboral antes del 27 de junio de 2010, que son pensionados en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cotización para salud se descuenta de la respectiva mesada pensional mensual no de la mensada adicional o la pensión de diciembre o del pago de la pensión de jubilación que se paga a la medida del mes de junio, según lo establecido en el artículo 14 de la ley 100 de 1993.~~

2. Los trabajadores que tienen una medida de junio en adelante a partir del 27 de junio de 2010, que son pensionados en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cotización para salud se descuenta de la respectiva mesada pensional mensual no de la mensada adicional o la pensión de diciembre o del pago de la pensión de jubilación que se paga a la medida del mes de junio, según lo establecido en el artículo 14 de la ley 100 de 1993.

PORCENTAJE PARA AJUSTAR ANUALMENTE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

DE LAS PENSIONES MÍNIMAS COBRADAS POR RÉGIMEN

EL 27 DE JUNIO DE 1993.

La Comisión Económica para la Salud, con autorización el 27 de junio de 2.003, determinó una tasa de ajustamiento del 5% en los regímenes por cuenta propia 20, los especiales, normatividad que ordena incrementar anualmente la mesada pensional en el mismo porcentaje decretado por el gobierno nacional para reajustar el salario mínimo mensual legal; pero actualmente la mesada pensional de mi mandante está siendo incrementada con base a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, es decir, solo se aumenta en el mismo porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) reportado por el DANE para cada año; situación que conlleva una disminución gradual del valor de la mesada pensional, ya que año tras año se está perdiendo poder adquisitivo frente al salario

TIERRAS & FAMILIAS - ASOCIACIÓN ESPECIALISTAS EN DIFUSIÓN LABORAL Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

• Término legal mensual:

La Ley 812 de 2.003, en su artículo 6 establece que:

(...) el régimen de pensiones que se establece en la presente ley, a los funcionarios y trabajadores civiles, así como en la administración educativa oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a esta ley. El personal docente que se vincule a partir de la entrada en vigencia de esta norma tendrá los derechos pensionables contemplados en la ley 100 de 1993 y ley 707 de 2003. Salvo lo previsto en la presente legislación, el nombre correcto es el de "profesional".

La norma anteriormente señalada, en los que los Docentes vinculados con anterioridad al 27 de Junio de 2.003, quedarán exentos de la aplicación del Régimen General de Pensiones, y se les regirán por lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de la promulgación: normatividad que arrancaría efectiva en el Capítulo 6 del Título 279 de la Ley 100 de 1.993, en donde de antemano expresa el legislador excluye al Magisterio oficial de la aplicación del Régimen General de Pensiones.

El texto original del artículo 11 de la Ley 100 de 1993 determinaba el campo de aplicación y las excepciones del Sistema Integral de Pensiones:

"El Sistema General de Pensiones, establecido en el Título 279 de la presente ley, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas y beneficios adquiridos y establecidos conforme a otras leyes normativas o anteriores para quienes en la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general."

En virtud de los efectos de la Constitución colombiana, en su artículo 14, apartado 1º, los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, podrán convención colectiva de trabajo.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que lo celeste a los partes y cumulo del Tribunal de Arbitraje laboral (en el caso de la Caja) o a los jueces (legales y recálicos fuera del territorio vigesimal).

En virtud a los mandatos constitucionales de legalidad, favorabilidad, irrenunciableidad y progresividad de los derechos laborales, que se encuentran contenidos en el artículo 53 de la Carta Magna; se estableció el campo de aplicación del Sistema General de Pensiones, conservando y resguardando los beneficios establecidos en las normas adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, no incluyendo las disposiciones contempladas en el artículo 279, siendo este último el que nos permitió finalmente determinar la exclusión de los docentes en la aplicación de la fórmula de recálculo periódico de las pensiones contenida en el artículo 14, reza el referido artículo:

ARTICULO. 279.-Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1993, en el caso de aquéllos que no dispongan de la fórmula de recálculo establecida en el artículo 14, quedando ésta en la forma siguiente:

ESTADÍSTICA MENSUAL DE ALBONDADOS
ESTADÍSTICA MENSUAL DE ALBONDADOS - ADAPTACIÓN INTEGRAL

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995) (Negritas fuera de texto).

Los docentes pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en principio se encuentran exceptuados del Régimen General de seguridad Social en Pensión creado con la Ley 100 de 1993.

Aplicación e integración del artículo 28 de la Ley 100 de 1993, a los pensionados que al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por medio del Decreto 692 de 1994 se dispuso la integración al Sistema General de Pensiones de diferentes grupos pensionables, particularmente se hizo para efectos del incremento fijado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dejando a salvo los regímenes excluidos del artículo 279, dentro de los cuales se encuentran los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, su tenor es el siguiente:

"Artículo 10. Incorporación de los pensionables. A partir del 1º de abril de 1994, se entienden incorporados al sistema general de pensiones los pensionados trabajadores del sector privado y del sector público.

Igualmente, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, sin embargo, para los efectos de la mayoría previsto en el artículo siguiente, a los pensionados que en su momento se les realizó la pensión con anterioridad al 1º de abril de 1994. No se entienden incorporados los pensionados de los regímenes excluidos en la Ley 100 de 1993. (Negritas fuera de texto)

Artículo 41. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de custodia, o sobrevivientes, en el sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustaran anualmente de oficio, el 1º de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Nota: las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida en el presente artículo, se hará a partir del 1º de enero de 1995.

Las normas traídas en cita ratifican expresamente la exclusión del incremento pensional conforme al IPC de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Aun cuando se contempló inicialmente la exclusión absoluta del Régimen General de Seguridad Social Integral de los referidos pensionados, esta prohibición fue atenuada

**ARTÍCULO 3º DE LA LEY 100 DE 1993
RENUCIANTES INDIVIDUALES AL REAJUSTE DE SUS PENSIONES**

mediante la Ley 233 de 1993, por medio de la cual se adicionó el artículo 142, en los siguientes términos:

Ley 233 de 1993.

ARTÍCULO 142. Se adiciona al artículo 14 de la Ley 100 de 1993 el siguiente párrafo: “Parágrafo. La Ley 233 de 1993 establece que las pensiones de los servidores que no implican negación de los beneficios que establece el artículo 14 de la Constitución, los artículos 14 y 142 de esta Ley sobre los pensionados de los servicios que contempla” (ver más proporción).

Como se observa, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 contempla la aplicación del artículo 14 de la Ley 233 a los regímenes exceptuados del artículo 27, a la existencia de un beneficio o favorabilidad laboral. Respecto al condicionamiento por favorabilidad traemos en cita pronunciamientos del Consejo de Estado dentro del régimen, exceptuado de las Fuerzas Militares, en los cuales resaltan la aplicación de la Ley 100 de 1993 a los pensionados de la Fuerza Pública, en su régimen especial, estos son del siguiente tenor:

CONSEJO DE ESTADO

S.E.S. - 110000 MINISTERIO PÚBLICO - 100
C.E.C. - 110000

Considerando lo siguiente:

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007).

Radicado número: 23/00-23-25-000-0-000-08152-01/2007-CP.

Actor: JOSÉ JUANES TUTIJO CASTAÑEDO

De acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación:

"..."

2. La ley 100 de 1993 en su artículo 230 excluyó de su aplicación al siguiente grupo de servidores del Estado:

a) Servidores de las Fuerzas Militares y de la Gendarmería Nacional;

b) Personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción del que se vincule a partir de la vigencia de la ley;

c) Los servidores de la Fuerza Aérea;

d) Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;

e) Los servidores de ministerios que en el año cincuenta y tres (53) estaban en servicio activo para el cumplimiento de su obligación;

f) Servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos ni sus pensionados, excepción hecha de quienes se vinculen por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, bajo las condiciones establecidas;

Por consiguiente, con base a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Gendarmería Nacional no eran beneficiarios del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la naturaleza particular del servicio de las Fuerzas Militares y la Gendarmería, la legislación establece que no se aplica la legislación general.

ESTUDIOS SOCIALES & ABOGADOS - ABOGADOS

WILHELMUS VAN DER HORST LACONICUS ET CANTICUS

ellos, en el año 2010 se realizó la revisión de las asignaciones de los integrantes de la Policía Nacional en actividad.

"Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados."

de aquí quiere significar que a partir de la vigencia de la ley 138 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, si tienen derecho a que se les readjuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de precios al consumo establecido por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la fecha de su alta en el sistema de pensiones.

Y la Sala encuentra que la ley 238 de 1935 es más favorable para el demandante que la ley 4^a de 1992 y el decreto 1212 de 1993, porque al hacer la comparación entre los reajustes penitenciarios derivados del aumento de las asignaciones en calidad de los oficiales de la Policía Nacional y sus similares establecidos en la ley 238 de 1937, la ley 100 de 1993, la 2724 de 2000, la 2737 de 2001 y la 111 de 2002 y los que resultan de la aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993, se observa que la aplicación de este último de reajuste resulta ser cuantitativamente superior.

"...Por lo tanto, el cargo concreto formulado es que resulta contrario al principio de legalidad y la garantía constitucional establecida en el artículo 169 de la Constitución, cuando lo demuestre el fiscal, que el procedimiento seguido por el Dr. Juez de la Sección Cuarta de esta corporación, según lo dispuesto en auto proferido con fundamento en el artículo 169 del C.C.A."

En el mismo sentido el Consejo de Estado se pronunció definiendo la favorabilidad como «un criterio deseable, pero no esencial» (en la Ley 34 de la I.E., 100, 68).

Principio de favorabilidad: En este sentido esta corporación admitió, de manera temporal, el ajuste de las asignaciones de retiro con base en el índice de precios al consumidor, IPC, y no cumplió con el principio de favorabilidad, pues al hacer una comparación de los montos que esta entidad otorgó y que resultaron más beneficiosas que las del régimen

Al respecto, concluyó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 adicionada por la Ley 238 del 26 de diciembre de 1995 que exime a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía de la obligación de pagar la prima de Seguridad Social, que siguió el funcionario al no cumplir con su obligación de cotizar en el año 2000, la variación porcentual del Índice de precios al consumo, certificado por el INDECO (art. 14), resultaba más favorable que las normas establecidas para su régimen especial, es decir, que el principio de oscilación.

“...en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la que se establecía el principio que el Presupuestamiento así dispuesto, rendiría una autorización para que por el año de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, dada por el Artículo 44 del Decreto 145-93 de 2000 que dejó de existir, si el principio de oscilación para ejercer de actualizar las referidas prestaciones.”(Consejo de Estado – Sala de los Contenciosos – Sección Segundo – Subsección A, Consejero Ponente WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, sentencia número 24577-00-000000-00-00000-00-1230-12, Actor: ANTONIO MECALDO).

TORRES & TORRES - ABOGADOS

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Para el caso de las Fuerzas Militares, el artículo 14 de la Ley 100, el cual es aplicable en virtud de la Ley 238 de 1995, por representar un beneficio al compararlo con el régimen especial exceptuado, es decir, cuál se cumplió con el presupuesto de aplicación por favorabilidad, para numerar fácto dentro el régimen exceptuado cuando éste dejó de representar una gracia.

Frente a los incrementos periódicos de las mesadas pensionables que han sido siendo aplicados a los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cabría preguntarnos cuál es el criterio de aplicación, cuando se manifiesta que este no representa beneficio alguno, lo contrario con el régimen exceptuado establecido en la Ley 100, lo cual se verifica en el artículo 14 de la Ley 71 de 1988.

Al crearse el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo objetivo principal fue el reconocimiento y pago de las prestaciones del personal docente y la prestación de los servicios médico-educativos, resultó que las Fuerzas Militares dentro de la Ley 100, permaneció fuera del régimen exceptuado que el régimen particular (pensiones, cesantías y vacaciones), al igual que la fórmula de incremento periódico de las pensiones establecida en la Ley 71 de 1988.

Con posterioridad fue establecida la Ley 101 de 1993, la cual estableció la creación a nivel del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quedando excluida la Ley 71 de 1988 y dando paso a la Ley 71 de 1993, al ser esta última dentro de la vigencia y derogarla las normas contrariales en su artículo 230.

En consecuencia, quedó establecida la Ley 71 de 1988, la cual establece la fórmula de incremento pensional dentro del artículo 14 de la Ley 71 de 1988, al establecer la aplicación del Índice de Precios al Consumidor como fórmula de incremento pensional, si y solo si ésta representaba un beneficio, condicionamiento establecido por medio de la Ley 238 de 1995.

En ese caso, no es aplicable con el cumplimiento por parte del magisterio, cumplir la indicada aplicación normativa, volver a introducir una situación que esté dentro dentro del régimen pensional exceptuado establecido a los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

PRÁCTICOS DERIVADOS DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 100 DE 1993.

La aplicación como fórmula de incremento pensional del Índice de Precios al Consumidor no supone cumplido el punto anteriormente mencionado, según la Corte Constitucional de Justicia en Punto 13, como lo establece la Corte Constitucional en sentencia C-387 de 2004, situación que no puede predicarse respecto a quienes han venido siendo aplicada esta norma por extensión, determinando una pérdida en el quantum de sus mesadas pensionables, toda vez que el haberlos sido incrementadas por el 1% en el año anterior a la fecha de la sentencia, lo que implica una diferencia de 20 años en los períodos.

Tal como procederá a ilustrar, se puede evidenciar que durante los últimos veinte años el porcentaje en que se ha incrementado el salario mínimo legal mensual ha sido sustancialmente menor al porcentaje de 100 establecido en el 100% que cumplió con el criterio de cumplir con el régimen exceptuado establecido en la Ley 71 de 1988.

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD AL INFLACIONARIO
ANEXO A LA DEMANDA DE DECLARACIONES DE DIFERENCIAS

6. Algunas de las nubadas pensionarias, signa de ser superada por los mecanismos judiciales.

Con el ánimo de demostrar el perjuicio que le está causando a mi mandante la aplicación del I.P.C. como fórmula de incremento pensionaria respetuosamente me dirijo a Usted para solicitar su criterio con respecto a las diferencias existentes entre los indicadores.

INDICADOR	I.P.C. a (1983=100)	DIFERENCIA (%)
1.980	28,62	-31,38 (-1,13)
1.980	29,31	-26,12 (0,11)
1.991	26,07	-32,36 (6,29)
1.992	26,01	-26,82 (-0,78)
1.992	25,18	-25,18 (0,10)
1.993	27,22	-22,30 (1,51)
1.995	29,50	-22,59 (2,09)
1.993	19,50	-19,46 (0,04)
1.993	21,31	-21,31 (0,81)
1.993	18,71	-17,38 (0,82)
1.993	18,91	-18,70 (0,69)
2.003	10,00	-9,23 (0,77)
2.004	9,96	-3,75 (1,21)
2.004	8,70	-7,60 (0,38)
2.004	7,63	-6,63 (0,45)
2.004	7,83	-3,43 (1,34)
2.005	6,56	-5,50 (1,06)
2.005	6,05	-4,35 (2,10)
2.005	6,30	-5,30 (1,62)
2.005	5,72	-4,38 (0,72)
2.009	7,87	-7,67 (-)
2.010	3,64	-2,03 (1,64)
2.011	4,70	-3,17 (0,83)
2.012	4,70	-3,73 (2,05)
2.013	3,92	-2,44 (1,58)
2.014	4,50	-1,94 (2,66)
2.015	4,16	-3,38 (0,84)
2.015	3,78	-3,78 (0,23)
2.015	3,71	-3,75 (1,25)
2.015	5,90	-4,09 (1,81)

En la medida de la certeza determino que con exactitud los perjuicios causados por el I.P.C. en su aplicación como fórmula de incremento pensional del Índice de Precios al Consumidor del artículo 14 de la ley 100 de 1993, omitiendo la favorabilidad que representa el artículo 7 de la ley 71 de 1989.

ESTUDIO SOBRE EL INCREMENTO ANUAL DE LAS

PENSIONES DE LOS DOCENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

NORMATIVIDAD QUE RIGE Y DETERMINA EL INCREMENTO ANUAL DE LAS PENSIONES DE LOS DOCENTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

ESTUDIO DE LA CEDOC, AÑO 2000

El incremento periódico de las pensiones, para las entidades estatales; y en especial los docentes por el Régimen Excepcional, está establecido en una proporción equivalente al 1% del sueldo base que el Código Civil del Sistema General de Regímenes Administrativos y Financieros establece para el personal de la administración pública, legal mensualizado año ocho días (artículo 1º, literal A, de la Ley 2102). La Ley que entró a regir a partir del 1º de enero de 1976, sustituyó la legislación del régimen anterior en materia de reajustes pensionales (Ley 4a. de 1970) que consagraba un incremento pensional inferior al aplicable al salario mínimo.

No obstante la supresión de la Ley 4a. de 1970, se llevó adelante la creación de los reajustes a los pensionados cuyos sueldos salariales quedaron rezagados con respecto a los docentes durante la vigencia de la Ley 4a. de 1970. Esto motivó la expedición del artículo 1º del Estatuto Tributario (reglamentado por el Decreto 2102 de 1992), que permitió reajustar las pensiones que se encontraban en situación de desigualdad frente al régimen de sueldo establecido en la Ley 71 de 1968; se dieron acuerdos entre los sindicatos y el Gobierno de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2102.

Las Leyes 4a. de 1976 (artículo 1º) y 71 de 1968 (artículo 1º, que remite a las pensiones de que trata el artículo 1º de la Ley 4a. de 1976) se referían a los reajustes de las pensiones "de los sectores público, oficial, semioficial, en todo su ámbito, nacionales, autonómicos y locales así como los que se encuentren en la administración local, en su caso, no descentrada, regionalizada, repartidora".

En vigencia de las precitadas leyes 4a. de 1976 (artículo 1º) y 71 de 1968 (artículo 1º), se expidió la Ley 91 de 1989, la cual creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Sector Público, cuyo objetivo principal es la realización del pago de las pensiones de los servidores públicos y la garantía de la ejecución de los servicios prestados a los individuos contratados con las entidades definidas por el Consejo Directivo (artículos 5, numerales 1 y 2, Ley 91 de 1989). La creación de este Fondo sólo modificó la legislación pensional preexistente en lo referente a la entidad que reconoce y paga las prestaciones sociales de los trabajadores. En consecuencia, permaneció intacto dentro del régimen suscrito el acuerdo de fondo de pensiones entre el sector público y los docentes (artículo 1º, numeral 2, consagrando la posibilidad de que el 1% para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 (literal A), y para quienes se vinculen con posterioridad a esa fecha, reconoce una pensión de jubilación del 70% del sueldo mensual promedio del último año y una prima del 10% de sueldo que equivaldrá a una mitad de sueldo, el resto de acuerdo a lo establecido en el decreto de pensiones del sector público nacional (literal B).

Con posterioridad fue expedida la Ley 103 de 1993, que como ya se vio, excluye de sus disposiciones a los afiliados el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Sector Público, y dejó en firme la Ley 91 de 1989. Mientras tanto, se mantuvo el acuerdo suscrito entre el sector público y los docentes, que se refleja en el artículo 1º del informe detallado:

"Artículo 1º. Se establece que el incremento anual de las pensiones de los docentes, empleados y trabajadores pertenecientes al sector público nacio-

**EL DERECHO DE LOS PENSIONADOS - ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO**

... a la violación por parte de las pensiones de jubilación, que acusamos ha significado la violación de la fórmula de incremento establecida en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, constituye una violación al mandato de progresividad laboral, como ha expresado el Dr. Jorge Gómez de Beltrán en su escrito del siguiente tenor:

“...En atención a lo anterior, aprobó mediante ley 76 de 1972 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 consagra el principio de la progresividad, así:

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar y promover, en lo más corto posible, medidas de cooperación internacional, especialmente económica, cuando para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformulada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de lo necesario y en el alcance de su competencia, para la realización de tales medios apropiados.”

Posteriormente, mediante la ley 319 de 1996, se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de julio de 1989, que en sus considerandos recordó que, “con base en los Estados Unidos Universales de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto dentro de sus derechos civiles y políticos” plasmando en su artículo 4º, el principio de la progresividad de los derechos reconocidos en el art. 1º en virtud de cualquier fuente ramal de derecho; y en su artículo 7º, que en el ejercicio del derecho al trabajo, toda persona debe gozar del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.

(S. C. J. de la Rep. de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sesión Segunda, en su voto de 16 de diciembre de 2016, expediente N.º 11001-08-25-0001-2006-002014-01, con voto contrario del magistrado CARLOS GRISELA GONGORA).

Finalmente queremos resaltar la violación retroceder en la prestación de los derechos pensionables, que no cumplen con su función, ya que resulta basado en una fórmula de salario en función de la antigüedad docente. Así, en el ejercicio de las pensiones, el retroceso o regresividad está enturbiado por el ejercicio abusivo del derecho por parte de las demandadas.

La propia idea de la fórmula de la ley 76 de 1972, resulta favorable para los docentes en su día salario y no al día de hoy. La Ley 100 de 1993, la cual no puede compararse a los Docentes, puesto que no representa beneficio alguno. (Artículo 1º de la Ley 236 de 1995).

Por otra parte, se ha visto que tanto, y en la medida de hecho surgido de la indebididad de la fórmula, se ha violado el principio de igualdad, de dignidad humana del trabajador del sector público, cuando ésta había sido superada con la expedición del artículo primero de la Ley 76 de 1972, siendo ésta la norma que representa la equidad y progresividad laboral para los docentes pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

DIFERENCIAS & TIC DIFERES AL PROGRESAR

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Con la determinación del campo de aplicación establecido en los artículos 111 y 279 de la Ley 100 de 1993, se buscó la salvaguardia de los derechos, beneficios y prerrogativas respecto a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo cual determinó la posibilidad de establecer una fórmula de incremento para los pensionados (artículo 14 de la Ley 100 de 1993).

La reducción porcentual en las pensiones de jubilación, que acusamos ha significado la aplicación de la fórmula de incremento establecida en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, constituye una violación al mandato de progresividad legal.

Con la articulación de los artículos 111 y 279 de la Ley 100 de 1993, se estableció un campo de aplicación creado a partir de la fórmula de incremento pensional establecida en la Ley 4 de 1973, determinando el incremento pensional aplicable a los regímenes del artículo 111 y 279 del señalado estatuto.

A la articulación los demandantes en su demanda en la Corte Constitucional (C.C) de 1993, el artículo 40 del Decreto 004 de 1994 y el artículo 1 de la Ley 103 de 1995, con el actuar de la administración al aplicar a quienes se encontraban exceptos el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, observamos una conducta jurisprudencial que no corresponde a la voluntad del legislador, al buscar la protección de los derechos y prerrogativas señalados.

La Honorable Corte Constitucional se ha referido a este tipo de conducta citando el Principio de Progresividad implícito en las regulaciones laborales, determinando la obligación del Estado a avanzar constantemente en la protección del trabajo a fin de lograr la plena realización de los derechos sociales, lo cual no se presume en el estadio de cosas incuestionables.

Al respecto me permite invocar lo manifestado por la nombrada corporación:

Sentencia C-507 de 2003:

Negrillas y resaltos fuera del texto original

(-)

"La Corte se ha referido a la prohibición de regresividad por la discriminación sistemática de protección de un derecho social. En otros, se ha referido a la violación de esa garantía constitucional por la disminución de los recursos públicos invertidos en la satisfacción de un derecho social o el aumento sistemático del costo para la persona de acceder a ese derecho en proceso de transformación. En tanto el tipo de decisiones la Corte ha restringido la aplicación del principio de progresividad y prohibición de regresividad cuando se está frente a sectores especialmente vulnerables de la población."

Como lo ha señalado la Corte, citando una frase de su propia doctrina, "no se impone el nivel de actualización de un régimen social en detrimento de otro, presumirse inconstitucional". Sin embargo, esta premisión omisiva, prueba en contrario. En este sentido la Corte ha señalado que la prohibición de regresividad es apenas una prohibición prima facie y no absoluta, lo anterior significa que cuando el Estado ha establecido una regla de desarrollo social, ésta tiene que ser una decisión política de desarrollar el régimen social y no una mera justificación suficiente para superar la prohibición de regresividad.

La aplicación indiscriminada del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, contrario al principio de los derechos adquiridos, discriminando sistemáticamente a los pensionados, al artículo 111 de la C.C. en el que se impone el principio de progresividad, en la situación que concierne al aumento que se establece en la fórmula de incremento pensional violado a los demandantes.

ESTUDIO DE CASOS - ALCONSA DO
ESTUDIO DE CASOS - ALCONSA DO

Así pues, bien del monto de la mesada al docente para actualizar la mesada pensional, no supone perjuicio alguno para quienes se encuentran dentro del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, situación que no puede predicarse respecto a quienes los vienen cobrando a base norma por omisión, y que como resultado de la inactividad aplican en la actualidad una perdida porcentual en el quantum de sus mesadas pensionales.

La mesada pensional a un docente está perdiendo anualmente poder adquisitivo frente al salario mínimo legal, ya que en el caso de esta manera un destino no gráfico, indicativo que es el I.P.C., en su año de proyección proyectada contiene la que es una tasa anual constante el salario mínimo sea superior a la mesada pensional reconocida al docente, pese a que cuando esta le fue concedida era ampliamente superior al salario mínimo.

En el caso de mi representado podemos observar el perjuicio que se le ha causado a su mesada pensional, puesto que de ese el momento en que le fue reconocida, ha sido actualizada con base al I.P.C., perdiendo cada año poder adquisitivo frente al salario mínimo, en la siguiente proporción:

Si en el año pasado en el momento en que la pensión del Demandante se hubiera actualizado con base a la proyección del incremento anual del salario mínimo legal establecido, y no con base al I.P.C., de cada año.

AÑO	VARIACIÓN SAL.MÍN.	I.P.C. A APLICAR	DIFERENCIA	
			(%)	(%)
2.009	3,41	5,68	-0,72	
2.009	7,07	7,67	-	
2.010	3,84	2,00	1,64	
2.010	7,22	3,17	0,83	
2.011	3,72	3,73	-0,20	
2.011	7,12	4,74	1,38	
2.012	4,50	2,64	1,86	
2.012	4,80	1,64	2,56	
2.013	4,60	3,66	0,94	
2.013	7,03	3,77	0,23	
2.014	5,80	4,77	1,25	
2.014	8,20	4,09	1,81	
TOTAL			13,64	

De modo que la actualización generalizada e incremento del salario mínimo es en una proporción superior al I.P.C., lo cual nos permite concluir que la aplicación de la legislación impone una pérdida porcentual en el monto de las mesadas pensionales, que en el caso de mi representado es un aproximado del 13,64%.

ESTUDIO DE CASOS - ALCONSA DO
ESTUDIO DE CASOS - ALCONSA DO

II. Sociedad Nacional de Pensiones y Aportaciones (Sociedad) como entidad que tiene la obligación de cumplir la legislación sobre las pensiones y que debe informar anualmente sobre el monto de las mesadas

pensionales la establecida en la Ley 100 de 1993, la cual viene aplicando desde el momento en que dicha norma entró en vigor.
El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que:

"ARTICULO. 14.- Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobre viviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo corriente, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación promedio del Índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incrementó dicho salario por el gobierno." (Negritos fueros de texto)

Puede observarse del tenor literal del artículo, que el reajuste oficial de las pensiones tiene dos fórmulas de incremento, la primera de estas es el Índice de Precios al Consumidor, aplicable a las pensiones reconocidas en montos superiores al salario mínimo, la segunda determinada por el incremento anual fijado por el Gobierno para el salario mínimo mensual, la cual es aplicable a las prestaciones pensiones reconocidas en monto igual a dicho salario.

La aplicación de estos indicadores en la práctica difieren, que las pensiones reconocidas con el salario mínimo suelen mantener su valor de oficio en el mismo porcentaje en que este fue fijado por el Gobierno, de tal manera que no hay un detrimiento en su cuantía, situación que no puede predicarse respecto a las pensiones que han sido reconocidas en montos superiores, las cuales anualmente vienen incrementándose en monto inferior al fijado para el salario mínimo, por ser este la tendencia histórica que mantiene el Índice de Precios al Consumidor.

De lo dispuesto en el citado artículo 14 de la Ley 100 de 1993, se infiere que lo pretendido por el legislador fue mantener el poder adquisitivo de las pensiones dentro del Sistema General de Pensiones, el cual fue creado por la Ley 100 de 1993,

"Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobre viviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo anual de acuerdo a lo establecido en el texto."

La anterior situación daría por una aplicación exclusiva a la fórmula fija mencionada anual con base al I.P.C., para los dos Regímenes creados por dicha norma, tal como se indicó en el artículo 12 de dicha norma:

"ARTICULO 12. El sistema de pensiones que crea esta ley, el Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes: estatutario e individual pero que coexisten, a saber:

- a. **Regimen Estatutario de Vejez, Jubilación, de Invalidez y de Sustitución.**
- b. **Regimen Individual (Individual o Complementario).**
(Subrayas fuera de texto).

REQUERIMIENTOS EN EL ÁMBITO LABORAL - ADMINISTRATIVO

Se ciñen más o menos el campo de aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, a los pensionados del Sistema General de Pensiones, al cual se enmarcó el régimen solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad. Los determinados dentro extienden a regímenes pensionales diferentes. Debe hacerse clara que los Docentes pertenecen al régimen del servidor público contemplado en el art. 101 de la Ley 100, y están pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro de la Región de Pensiones del Magisterio.

La Interpretación literal del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, nos permite establecer con total claridad que su campo de aplicación se limita a las pensiones otorgadas dentro del régimen de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad del Sistema General de Pensiones, el cual de los cuales NO se encuentran las pensiones otorgadas con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

El tenor literal de las normas traídas en cita señalan el alcance de los contenidos interpretativos que en su otra parte que no permitan apartarnos del mismo, al respecto al art. 14 de la Ley 100, “Véase lo siguiente”:

ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

“En caso de que no sea posible, para interpretar una disposición dudosa de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.”

En la Constitución de 1991, el que pretendido en ordenario fue mantener el poder adquisitivo de las pensiones dentro del Sistema General de Pensiones, no siendo en ningún modo aplicable a las pensiones reconocidas dentro de regímenes diferentes, como efectivamente se ha realizado en el caso sub examine con los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desatendiendo el tenor literal de la Constitución.

No cabe pasarse por alto, que el artículo 14 se encuentra dentro del Capítulo I, Libro I de la Ley 100 de 1993, el cual señala el “OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES”, como lo han hecho las demandadas al extender su aplicación dentro de un contexto diferente, afectando a un universo de personas de quienes poco o nada se dice en dicho sistema.

La aplicación del índice de precios al consumidor como fórmula de incremento pensional, no representa una conducta ilegal para los pensionados dentro del Sistema General de Pensiones, situación que no puede predicarse respecto a la extensión de dicha fórmula a los pensionados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyas rúbricas por sus normas especiales.

La limitada aplicación del artículo 81 de la ley 812 de 2.003, ha causado un detrimento económico a mi representado, ya que se han reducido ilegalmente los beneficios económicos que le generaba su mesada pensional. Con dicha situación se está violando contra el derecho fundamental a la seguridad Social de la Demandante.

Al respecto de lo anterior, ilustrando que el fallo de la Honorable Corte Constitucional, sobre desmejoramiento ilegalmente los derechos pensionales:

Fundamento 1-A(3).17

TOPICAL BIBLIOGRAPHY OF

THE BIBLE

(negocios y residuos fuera del territorio europeo)

Reference: [Hawkins et al., 2007](#)

Teachers' Expectations of Students

entrevista que se realizó con el administrador del establecimiento, se manifestó que la visita fue digna.

REFERENCES AND NOTES

REFERENCES AND NOTES

Bogotá D.C., diecisés (16) de mayo de dos mil trece (2013)

Table 4. Correspondence of the elements of the α - and β -helices.

Por su parte, la otra es el *seguro social*, que es el sistema de pensiones. Junto a las disposiciones de seguridad social se incluye en el Código de Trabajo la legislación sobre las pensiones. Junto a las disposiciones de seguridad social se incluye en el Código de Trabajo la legislación sobre las pensiones.

Al efecto, las autoridades competentes podrán establecer en los presupuestos para el ejercicio que comienza el año de entrada en vigencia de este acto legislativo, y sus sucesivos, la cantidad de los recursos que se destinarán a la ejecución de las obligaciones en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Si el agua de los ríos es de color gris, se debe a que las aguas están ordenadas de acuerdo con la ley de la tercera norma, que es la de la de papel, en que las estrictas regulaciones de la naturaleza de los ríos tienen una influencia muy grande.

Además, el artículo 58 requiere los principios mínimos para fomentar la relación laboral dentro de los cuales se encuentra la garantía de la igualdad y no discriminación entre los trabajadores. El artículo 58 establece que: «Los principios mínimos para fomentar la relación laboral dentro de los cuales se incluye la garantía de la igualdad y no discriminación entre los trabajadores, se aplicarán a las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores, así como a las relaciones entre los trabajadores y las organizaciones sindicales o de trabajadores, y entre las organizaciones sindicales o de trabajadores».

**ESTADO DE MÉXICO
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
ASUNTOS PREDOMINANTES LABORAL-ADMINISTRATIVO**

Como máximo intérprete de la Constitución, esta Corporación se ha referido a los artículos citados y **ha concluido que la seguridad social es un derecho fundamental como desarrollo, al bien ha sido confiado a entidades estatales o nacionales, en su calidad jurídica de organizaciones voluntarias, una legislación normativa preestablecida en el orden constitucional y en las *Normas Internacionales* que hacen plena vigencia de su constitucionalidad, los cuales dan cuenta de una obligación de cumplimiento dirigida a la dignidad humana.^[62]**

En la *Convención sobre la Protección Universal de los Derechos Humanos*, el *Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales*, y el *Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*^[63] consagran el derecho a la **satisfacción de un nivel de vida adecuado que responda a la dignidad humana** y que se cumpla dentro del marco de concordancia con el artículo 23 de la Constitución Política.

En tanto, el *Artículo 22 de la Convención Universal de los Derechos Humanos de 1948* establece que todo individuo tiene derecho a la **satisfacción económica, social y cultural, la cooperación internacional, habeas cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.**

Finalmente, el *Artículo 22 de este mismo cuerpo* señala que **toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, y con éste, a estar asegurado en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otras causas de pérdida de sus medios de subsistencia por causas imprevisibles o de la fuerza mayor. Los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de garantizar a su población que la **seguridad social se encuentre estrechamente ligada a la dignidad humana y constituye un elemento del derecho de las personas a tener un nivel de vida adecuado.****

VII. PRUEBAS

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía de mi poderdante.

2. Fotografía digitalizada de la cédula de identidad de mi mandante.

3. Copia simple de la Resolución N° 17102 de 08 de Septiembre de 2009, mediante la cual la asociación reconoció la pensión de jubilación a mi mandante.

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

4. Copia simple de un recibo de pago de la mensada pensional que el beneficiario, en donde se conste evidencia el monto total del pago, que fue efectuado como aporte al sistema de pensiones.
 5. Copia de oficio No. 2016107634-31 de 03 de Octubre de 2016 emitido por La AFP previsora.

B -). JURISPRUDENCIALES:

En atención a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1487 de 2011 y en el art. 8º del
acápite al señalar que tener en cuenta los Procedimientos Judiciales, para que se proceda
en el caso de violación de la norma, los cuales de manera tal ordena se tienen los
fundamentos jurídicos aquí expresados y subsecuentemente la legalidad de las
pretensiones solicitadas.

C-1 DE OFICIO:

Ansí, leemos que solicita al Honorable Juez levantar las siguientes:

1. Se oficie a LA FIDUCIA, (Entidad encargada de la administración del Fideicomiso) y a LA SECRETARIA DE ESTADOCRÍTICO DIFERENCIAMENTO DEL CÁDIZ, para que allegue a su despacho copia de todo el expediente administrativo de mi representado, petición que da conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, apartado 1º de la Ley 14/97 de 2.8.97, de "Alegación de la parte demandante hacerlo al momento de dar su testación a la prueba de la sentencia".
 2. Se oficie a LA FIDUPREVISORA, (Entidad encargada del pago de las prestaciones del Magisterio) para que allegue a su despacho certificación histórica de todos los pagos de pensión efectuados a mi representado, donde se consignen el monto de las diferencias existentes entre el sistema de jubilación y su jubilación actual y la forma de incremento anual a la mensada pensional de mi representado.
 3. Las que el señor Juez considere pertinentes.

IX. ESTIMACIÓN BAJADAADA DE LA QUANTÍA

La entidad accionada debe reintegrar al Señor "A" N.P. AGUILAR, su fondo de pensiones, los dineros superiores al 5%, que dejó el retiro de aportaciones y cotizaciones heredadas, durante la vigencia de los sistemas pensionables y edificables de Jefes y Trabajadores, y los que se vayan descontados hasta el momento en que se proliere la sentencia y sea lo que el juzgado cumplimiento.

ESTUDIO DE IMPACTO AL BUDGET

ANEXO 1. ESTUDIO DE IMPACTO AL BUDGET

ESTUDIO DE IMPACTO AL BUDGET - ANEXO 1. ESTUDIO DE IMPACTO AL BUDGET A. S. 2012

Tercera parte. Estudio de impacto al presupuesto destinado a la pensión para servidores con residencia permanente para salud con base a la Ley
Ley 703 de 1.998
91 de 1.998

Periodo	Mesada	Porcentaje	Valor	Valor aporte	Diferencia
	Total	Residencia permanente	Residencia temporal	total por mesada	total
2.013	\$ 1.232.271	12,50%	178.212	\$ 71.314	\$126.670,68
2.008	\$ 1.535.633	12,50%	101.952	\$ 76.783	\$115.174,95
1.993	\$ 1.619.771	12,50%	166.797	\$ 78.319	\$117.476,45
1.998	\$ 1.623.800	12,50%	166.267	\$ 80.602	\$112.197,38
2.012	\$ 1.691.234	12,50%	156.612	\$ 80.526	\$128.267,04
2.013	\$ 1.711.234	12,50%	213.907	\$ 85.563	\$128.344,04
2.014	\$ 1.744.452	12,50%	218.057	\$ 87.223	\$130.833,92
2.015	\$ 1.806.239	12,50%	226.037	\$ 90.415	\$135.622,44
2.016	\$ 1.861.721	12,50%	231.682	\$ 92.383	\$144.804,05
2.017	\$ 1.917.733	12,50%	236.217	\$102.087	\$153.130,34
2.018	\$ 2.125.245	12,50%	266.656	\$106.232	\$159.393,34

De la misma manera se establecerá el efecto en el costo de los tres últimos años provisamente establecidos a continuación:

AÑO	LA MESADA	PER	DIFERENCIA EN NÚMERO	
			TOTAL	RESIDENCIA PERMANENTE
2.013	\$ 1.232.271	12	\$ 4.733,17	
2.018	\$ 1.861.721	18	\$ 1.882.453	
2.019	\$ 1.917.733	18	\$ 1.990.694	
			\$ 1.588.221	
			\$ 4.873.045	

De la misma manera deberá establecer la diferencia que existe entre la mesada que ha venido pagando y la que resulte después de aplicar los incrementos establecidos en la ley 703, así como bien a la mayor proporción en que se ha aumentado el salario mínimo cada año; procediendo a pagar las diferencias establecidas, tal como me permitió señalado:

**ESTUDIO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y CIVIL
ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS SOCIALES**

VALOR PAGADO CON BASE AL I.P.C.			VALOR A REGLAR CON BASE A LA PROPORCIÓN DEL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO		
AÑO	I.P.C. a APLICAR	VALOR PAGADO CON BASE AL I.P.C.	AÑO	INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO	VALOR A REGLAR CON BASE AL SALARIO MÍNIMO
2.008	5,69%	\$ 1.426.271	2.008	6,41%	\$ 1.426.271
2.009	7,67%	\$ 1.535.666	2.009	7,67%	\$ 1.535.666
2.010	2,00%	\$ 1.566.379	2.010	6,64%	\$ 1.566.379
2.011	3,17%	\$ 1.616.034	2.011	4,66%	\$ 1.616.034
2.012	3,73%	\$ 1.676.312	2.012	5,61%	\$ 1.731.358
2.013	2,44%	\$ 1.717.214	2.013	4,02%	\$ 1.821.821
2.014	1,94%	\$ 1.750.528	2.014	4,50%	\$ 1.903.783
2.015	3,66%	\$ 1.814.597	2.015	4,23%	\$ 1.881.061
2.016	6,77%	\$ 1.937.245	2.016	7,03%	\$ 2.100.741
2.017	5,75%	\$ 2.048.648	2.017	7,03%	\$ 2.249.648
2.018	4,09%	\$ 2.132.643	2.018	5,80%	\$ 2.414.411

La diferencia existente entre la mención remontando que he sido reajustado anualmente a mí representado y la que legalmente le corresponde es la siguiente:

AÑO	DIFERENCIA EN LA PAGADA EN EL PERÍODO		AUMENTO EN EL SALARIO MÍNIMO	VALOR A REGLAR
	PAGO	DIFERENCIA		
2015	\$ 176.760	0	\$ 530.279	
2016	\$ 193.307	13	\$ 2.512.926	
2017	\$ 221.656	13	\$ 3.631.720	
2018	\$ 241.176	13	\$ 3.631.720	
DIFERENCIA TOTAL				\$ 6.864.720

CUANTÍA TOTAL:

CUANTÍA TOTAL	
Valor el 7% cobrado de más en salario (tres últimos años)	\$ 3.870.645
Valor diferencia pensional entre I.P.C. y el porcentaje del salario mínimo (tres últimos años)	\$ 6.864.720
TOTAL	\$ 14.735.367

El monto de las preferencias de la demanda por los tres últimos años depende una cuantía por un valor de CATORCE MIL PESOS SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS SEISCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$14.735.367).

**ESTUDIO DE COMPETENCIA
EN CASO DE DEMANDA EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO**

II. ESTUDIO DE COMPETENCIA

El Juez Administrativo del Circuito del POPAYAN es Competente para conocer de la presente demanda en virtud a los siguientes factores:

a) **Por Oficio Jurisdiccional.** El señor WILLIAM ANTONIO ZUÑIGA CAMPO, se ha designado como Procurador y su último cargo judicial fue por designación del MINISTERIO PÚBLICO, por lo tanto, y en razón a que se trata de una demanda de Qualität y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral y conforme a lo dispuesto en el Art 156, numeral 3 de la Ley 1437 de 2.011, y el acuerdo N° PSAAC6-3806 DE 2.006, es el circuito del POPAYAN competente para conocer de esta Acción Judicial.

b) **Por determinación de Competencia:** El Artículo 155, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011 establece que Los Jueces Administrativos deben conocer en primera instancia de los procesos de qualità y restablecimiento del derecho en que se controvieren Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no excede de trescientos (300) mil pesos colombianos según sus usos y rigentes.

c-) **Por razón de Cuantía.** Según lo establecido en el Artículo 157 de la Ley 1437 del 2.011, la cuantía es establecida por el valor de las pretensiones de la demanda; sin que el mismo sea menor al millón trescientos mil pesos anteriores a la fecha de presentación de la demanda, con un valor calculado en **MONTO DE LOS MIGRANTES DESPLAZADOS Y VULNERABILIDAD SUSTENTABLE Y SISTEMA PECOS MCTE (\$14.765.000)**.

III. DOCUMENTOS

- Poder conferido por el Demandante.
- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Copia de la demanda y sus anexos para los respectivos trámites de Ley.
- Medio magnético con el contenido de la presente demanda (C.D.).
- Copia del contrato de servicios profesionales de Abogado

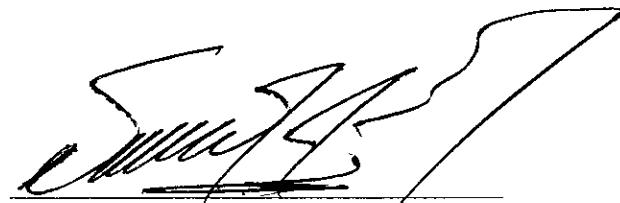
IV. MANIFESTACIONES

- A la Entidad demandada en la Calle 43 N° 57-14 CAN en Bogotá, teléfono 2222800, correo electrónico abogadocesarbarres@gmail.com
- El Demandante las recibirá en la Calle 16A No. 11-04 de Timbío, teléfono 3128332312, o por intermedio del suscrito apoderado judicial en su domicilio abogadocesarbarres@gmail.com

TORRES & TORRES - Abogados
ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL - ADMINISTRATIVO

- Al suscrito apoderado las recibirá personalmente en la Secretaría de esa Honorable Corporación, o en mi oficina de Abogado ubicada en la Avenida 2 Norte N° 7 N - 55 Oficina 413 Edificio Centenario II de la ciudad de Cali - Valle del Cauca. Teléfono: 801.3530 – 801.35.0007 o de correo electrónico que lo preceptuado en los Artículos 3º, 5º, 201, 102 y 215 de la Ley 1437 de 2007, se me puede Notificar por medio electrónico al siguiente correo:
abogadoescartorres@gmail.com

Del señor Juez,



OSCAR GERARDO TORRES TRUJILLO
C.C. N° 79.629.201 de Bogotá.
T.P. N° 219.065 del C.S.J.